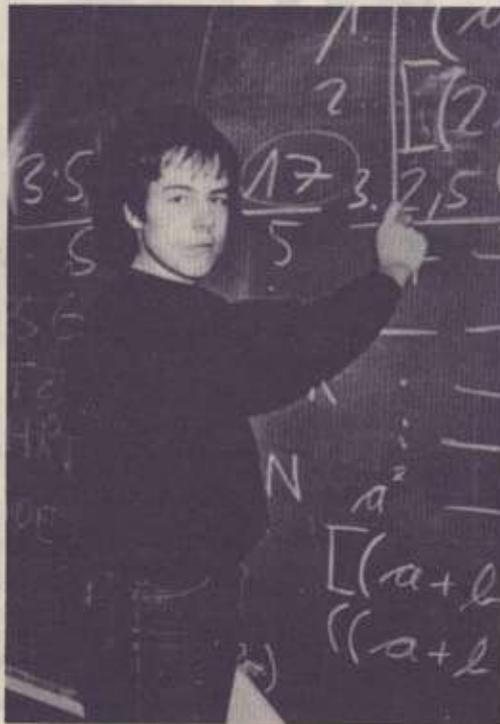


# POLÍTICA Y SOCIEDAD



PARO CIVICO

NACIONAL





# PROTESTA SOCIAL Y ESTADO EN EL FRENTE NACIONAL<sup>1</sup>

MAURICIO ARCHILA NEIRA<sup>2</sup>

*"Entendemos el Frente Nacional como un supremo y solidario esfuerzo de los colombianos para conseguir la paz entre los partidos; perfeccionar las instituciones democráticas; impulsar el desarrollo económico y forjar la estructura de una sociedad moderna, no dividida por las tremendas desigualdades que hoy la caracterizan y que ofrezca a todos sus miembros trabajo remunerado, un nivel de vida decoroso, protección contra los riesgos, libre acceso a la cultura y amplias oportunidades para ascender a las capas directivas, tanto en la esfera de la actividad privada, como en el campo de los negocios públicos."*

(‘Norma obligatoria de conducta’ elaborada conjuntamente por 40 notables de los dos partidos y recogida por Carlos Lleras en un discurso como candidato presidencial el 23 de octubre de 1964)<sup>3</sup>

1 Informe final de investigación del subproyecto Movimientos Sociales y Acción Colectiva en Colombia, Cinep, enero de 1997. El autor agradece la colaboración en la lectura de prensa de esos 17 años a los estudiantes de Historia de la Universidad Nacional: Liliana Castro, Lida M. Núñez, Sandra Reyes, Moisés Munive y José Polo. A los integrantes del equipo de Movimientos Sociales, participación política y Estado, del Cinep (Fernán González, Ana María Bejarano, Renata Segura y Helena (Iseche) por la discusión de los avances previos y las pertinentes sugerencias teóricas y metodológicas para éste. Por último a Martha C. García por la elaboración de la base de datos, la ayuda en la construcción de los cuadros y por las advertencias de todo orden para el mejoramiento del texto. El resultado es responsabilidad enteramente mía.

2 Profesor Asociado Universidad Nacional e Investigador Cinep.

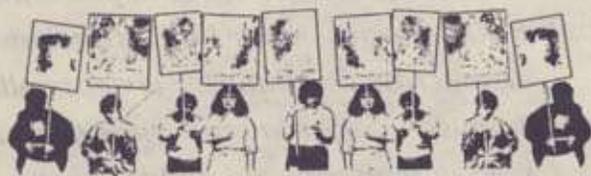
3 Citado por Humberto Rojas y Alvaro Camacho G., *El Frente Nacional: Ideología y realidad*. Bogotá: Ed. Punta de Lanza, 1974, pág. 29.



pesar de los propósitos de quienes construyeron el régimen de coalición que gobernó al país entre 1958 y 1974, el Frente Nacional distó de cumplir lo que prometió. Sin duda apaciguó los ánimos beligerantes de los parti-

dos e impulsó cierto crecimiento económico pero se quedó corto en perfeccionar la democracia y, sobre todo, en alcanzar el ideal de sociedad moderna que pregonaba. Dilucidar estos resultados desde la perspectiva de los grupos sociales menos favorecidos es el propósito que ha conducido la investigación de la cual presentamos este artículo<sup>4</sup>.

El escrito está dividido en tres grandes secciones. En la introductoria se intenta dar cuenta de las categorías claves desarrolladas en la investigación. En la segunda sección se hará, en forma descriptiva, un recorrido por las trayectorias anuales, sectoriales y regionales de la protesta social entre 1958 y 1974. En la última se propondrá un análisis de las protestas sociales como tales y de sus relaciones con la sociedad mayor, el sistema político y el Estado.



### CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

Aunque el concepto teórico que orientó a esta investigación fue el de Movimientos Sociales, por razones que a continuación enumeramos preferimos utilizar un indicador más apropiado para el proceso histórico considerado: la *Protesta Social*. Nuestra definición de Movimiento Social incluye cuatro elementos a saber: *Acción Social Colectiva*, más o menos *Permanente*, que denota *Conflicto* por injusticias, desigualdades o exclusiones, y que tiene un carácter *Propositivo*. Aunque en ella cabrían los sectores sociales más visibles -laboral, campesino y tal vez estudiantil-, sería de difícil aplicación para el

movimiento cívico y otros de menos visibilidad durante el Frente Nacional (mujeres e indígenas). Recuérdese que Colombia vivía un momento de retorno limitado a la democracia y que muchas expresiones de la sociedad civil aún estaban en proceso de gestación.

Por ello, más que centrar nuestro análisis en la existencia o no de movimientos sociales, nos inclinamos por detectar el campo más amplio en el que ellos actúan: el de la protesta social. A ella la definimos como toda *acción social colectiva que expresa intencionalmente demandas o presiona soluciones ante el estado* -en sus diversos niveles-, *entidades privadas o individuos*<sup>5</sup>. Las protestas sociales son expresiones puntuales de los movimientos a los que nos referíamos anteriormente y no requieren de permanencia o expresión organizativa manifiesta. Ahora bien, no siempre constituyen movimiento social pues en determinadas circunstancias se quedan como meras luchas aisladas. Las protestas sociales son una de las formas como se hacen visibles los movimientos sociales pero no son categorías idénticas. Hay otras maneras de lograr visibilidad como ocurre con las expresiones organizativas o con prácticas no conflictivas de negociación.

Al resaltar la Protesta Social como variable central de análisis buscamos aproximarnos al problema de fondo que nos interesa investigar: la dinámica de los conflictos en la incipiente sociedad civil colombiana durante el Frente Nacional. De esta forma nos acercamos a las demandas que desde algunos sectores sociales se plasmaron ante el Estado o ante otros miembros de la sociedad civil, a las formas de lucha que se usaron para presionar esas demandas y a las posibles respuestas que obtuvieron<sup>6</sup>. Aunque puedan existir muchos conflictos latentes, sólo logramos reconstruir históricamente aquellos que se hacen manifiestos. Por ello insistimos en la *Visibilidad* como un elemento clave para ubicar a los actores y a los posibles movimientos involucrados.

Hay además un presupuesto que guía nuestra investigación: la diferencia entre la *Esfera Social* propiamente dicha y la *Política*<sup>7</sup>. La distinción parte de la constatación de que en las democracias modernas existen en forma diferenciada actores sociales y

actores políticos. Los primeros encarnan demandas sentidas de los miembros de la sociedad civil, los segundos serían los intermediarios entre ésta y el Estado. Aunque son mutuamente necesarios -metafóricamente podríamos hablar del mundo de los representados y el de los representantes- y aunque conjuntamente pueden ser los mismos, se trata de actores y esferas diferenciadas.

Para que los diversos actores sociales y políticos interactúen en forma diferente sin debilitarse se requiere que cuenten con *Autonomía y Capacidad* de ejercerla. La primera, para el caso de los actores sociales, sería la posibilidad de proponerse fines propios y hacerlos públicos sin presión o cooptación del sistema político o del Estado. La posibilidad de llevarlos a cabo independientemente del éxito, sería el termómetro de su capacidad de ejercer dicha autonomía<sup>4</sup>. De esta forma, lejos de postular la existen-

cia de esferas aisladas y excluyentes, se les coloca en interacción, casi siempre conflictiva, pero con resultados que no necesariamente son de suma cero; pueden ser de suma positiva (ambos ganan) o negativa (ambos pierden). Para nuestra investigación las categorías de autonomía y de capacidad de ejercerla son claves pues más que marginar las protestas sociales del amplio espacio público, se reconoce su presencia allí. Es una perspectiva que no aísla a los movimientos sociales en un comunitarismo excluyente, sino que los integra a las formas de representación y participación de la sociedad civil. De paso se evitan los sesgos de sobrevaloración de la esfera social o de la política, satanizando a una para privilegiar a la otra. Se reconoce simplemente que son distintas y que se manifiestan en forma diversa aunque se toquen por momentos e incluso desemboquen en el mismo espacio público común<sup>5</sup>.

- 4 En la investigación como tal se revisó la literatura existente en nuestro medio sobre el período mencionado. En forma simultánea se buscó información primaria sobre protestas sociales en la gran prensa nacional, en la obrera y regional: *El Tiempo* (1958-1974); *La Calle* (1959-60); *La Gente* (1959); *Voz de la Democracia* (1958-59); *Voz Proletaria* (1963-1974); *Liberación Obrera* (1963-69); *Lanzadera* (1964-65); *El Obrero Católico* (1968) y *Tribuna Roja* (1971-74). De igual forma en revistas y publicaciones esporádicas tales como *Documentos Políticos* (1958-1974); *Semana* (1958-63); *Nueva Prensa* (1961-66); *Tierra* (1966-67); *Flash* (1968-74); *Alternativa* (1974) y *SETT* (1973-74). Con la información cuantitativa se construyó además una base de datos que sirvió para la elaboración de los cuadros respectivos. Esta base de datos se complementó con la brindada por Alvaro Delgado para el movimiento huelguístico (parte publicada en obra conjunta conmigo *¿Dónde está la clase obrera?* Bogotá: Cinep, 1995). La información cuantitativa se contrastó también con las bases de datos sobre invasiones campesinas de León Zamosc (Los usuarios campesinos y las luchas por la tierra en los años setenta. Bogotá: Cinep, 1985), paros cívicos de Medófilo Medina ("Los paros cívicos en Colombia, 1957-1977, *Estudios Marxistas*, No. 14, 1977, págs. 22-23) y *luchas cívicas en Bogotá* de Alfonso Torres (*La ciudad en la sombra*. Bogotá: Cinep, 1993).
- 5 No sobra señalar que en teoría la dinámica civilista en la que se inscriben esas protestas las diferencia de las acciones armadas. Las primeras buscan el éxito por la vía de la negociación pacífica y no de la imposición de las armas. En la realidad colombiana las cosas son más complejas por las dosis de violencia que atraviesa nuestra historia con sus concreciones de instrumentalización y criminalización de las protestas, tema que fue abordado en nuestro previo artículo "¿Utopía armada? Oposición política y movimientos sociales durante el Frente Nacional", *Controversia*, No. 168, mayo de 1996, págs. 25-53.
- 6 Lo que nos interesa en estas páginas, más que la discusión filosófica sobre la justeza de la protesta, es lo que ella refleja de las demandas desde la sociedad civil y la visibilidad que proporciona a algunos de sus actores. Suponemos con la teoría corriente sobre movimientos sociales que el recurso a la protesta es por lo general una acción racional por parte de los actores que acuden a ella (Jean Cohen, "Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements", *Social Research*, Vol. 52, No. 4, Invierno de 1985).
- 7 En este punto seguimos de cerca a Alain Touraine (*¿Qué es la democracia?* Madrid: Temas de Hoy, 1995, págs. 212-219). Empíricamente la primera corresponde a los movimientos sociales y la segunda a los partidos políticos. Los totalitarismos pretendieron fundir en una sola estas esferas con resultados negativos para ambas.
- 8 Estas definiciones se apoyan en las ofrecidas por Theda Skocpol para el Estado (*Bringing the State Back In*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, pág. 9).
- 9 Eso último es lo que designábamos en anterior artículo **Lo político** distinto de la acción política concreta a que nos hemos referido (Véase "¿Utopía armada?..." págs. 26-29). Aunque no contamos con el espacio suficiente para desarrollar esta perspectiva, no sobra señalar que significa una ruptura con el tradicional entendimiento de la historia social a la que se identificaba como aquella que no tocaba la política. En su rechazo a la historiografía tradicional, positivista y legitimadora de los poderes vigentes, los historiadores sociales liderados por los fundadores de la Escuela de los Annales, postularon una historia social que se marginaba de la política entendida como búsqueda de poder o el arte de gobernar. Véase a este propósito las reflexiones de Julián Casanova, *La historia social y los historiadores*. Barcelona: Crítica, 1991 y más recientemente el debate iniciado por Ira Katznelson sobre los nuevos rumbos de la historiografía laboral, "The 'bourgeois' Dimension: A Provocation about Institutions, Politics, and the Future of Labor History", *International Labor and Working-Class History*, No. 46, otoño de 1994, págs. 7-32.

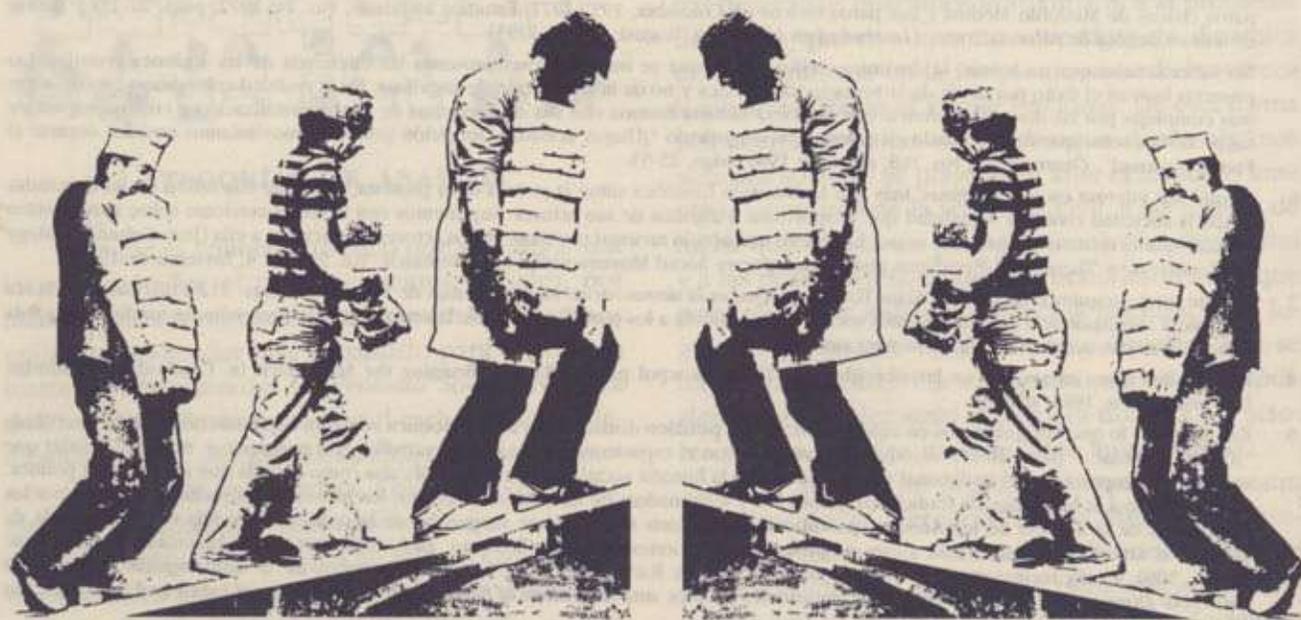
En la existencia autónoma de actores sociales juega un papel central la construcción de *Identidad* colectiva para su cohesión. Ella consiste en la percepción de intereses propios en oposición a los de otros actores, incluido el Estado. La construcción de identidades colectivas es un proceso histórico en el que influyen tradiciones, valores, imágenes externas y autoimágenes, nuevos discursos y la evolución del conflicto social en el que están inmersos los actores sociales<sup>10</sup>.

Ahora bien, las identidades colectivas se perciben cada vez más como comunidades imaginadas producidas por la asociación voluntaria, que como agrupaciones "naturalizadas" a las que de manera obligada se debe pertenecer. Destaca entonces no sólo la dimensión cultural y simbólica presente en la construcción de toda identidad colectiva, sino su carácter eminentemente histórico<sup>11</sup>. La obvia consecuencia, por demás palpable en términos empíricos, es que un individuo puede tener muchas identidades que prioriza según los contextos vividos. En ese sentido, no existe *apriori* una forma de identidad superior a otra; el privilegio que se le otorgue socialmente a una radicaré en la amplia y sólida

cohesión que ofrezca a los individuos en sus acciones específicas y en momentos concretos.

En un plano más operativo debemos precisar los entornos de lo que hemos designado como la protesta social. Nos referimos a los sectores sociales y a los tipos de lucha que incluimos. En relación con lo primero, hablamos de siete sectores más o menos visibles en el período estudiado: laboral, campesino, cívico, estudiantil, mujeres, indígena y empresarial. Es evidente el desnivel en la categorización pues se mezclan dimensiones de clase, generacionales, étnicas o de género. Ello es consistente con nuestra reflexión sobre las identidades colectivas, que responden a convergencias de sujetos por demandas de diverso orden, no sólo material. Por tanto, no sólo hay identidades de clase, las hay también por dimensiones culturales o simbólicas como sucede con las mujeres, indígenas o estudiantes. Hagamos explícito qué entendemos por cada uno de estos sectores recogiendo lo acuñado por la literatura corriente.

El sector *Laboral* puede equivaler al obrero en el sentido amplio de esta categoría: cubre a todos los trabajadores directa o indirectamente productivos,



en áreas urbanas o rurales, que derivan de la relación salarial los costos de su reproducción. Aunque lo laboral coincide con el mundo sindical, no se circunscribe a éste pues la cobertura organizativa es limitada (en nuestro caso no ha sido superior al 16% de la población económicamente activa).

El sector *Campesino* remite a los trabajadores rurales que laboran directamente la tierra y derivan su sustento en lo fundamental de ella. Salta a la vista la heterogeneidad de sus componentes pues la categoría incluye, desde arrendatarios o campesinos pobres, hasta propietarios agrarios más o menos acomodados que siguen laborando en forma directa la tierra. El movimiento *Indígena*, que había tenido una temprana expresión a principios de siglo en torno a las gestas de Manuel Quintín Lame, resurge en los años setenta al abrigo de la lucha campesina. La reconstrucción de su propia identidad se insinúa en estos años, sobre todo alrededor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, pero su consolidación será un proceso posterior<sup>12</sup>. En ese sentido, sentirse indígena no es algo natural sino que responde a una opción de quienes, desde condiciones étnicas especiales reconocidas jurídicamente -que no excluyen elementos espaciales y socio-económicos-, deciden identificarse como tales<sup>13</sup>.

Los *Estudiantes* son otro sector altamente heterogéneo, no sólo por su diversidad socio-económica, sino por su carácter transitorio y generacional. Por ello es difícil aplicarles con rigor nuestra definición de movimientos sociales. Lo que los une

no es propiamente una posición de clase, aunque no están ausentes las demandas materiales, sino el paso por el sistema escolar. Como lo han entendido los investigadores, esta categoría se refiere básicamente a los estudiantes universitarios y, en segunda escala, a los de secundaria.

La categoría *Cívico* es aún más compleja, si cabe la posibilidad. Ha sido utilizada con diversos sentidos. En ocasiones designaba a los sectores civiles opuestos a la dictadura militar, a veces a las movilizaciones no políticas, otras veces se refería a los habitantes urbanos o a las protestas de corte regional. Esa ambigüedad del concepto ha sido recogida por los investigadores que se refieren a luchas policlasistas por demandas específicas en una clara referencia territorial, urbana o regional. Los mismos investigadores prefieren hablar de luchas cívicas más que de movimientos pues se duda de su expresión organizativa permanente<sup>14</sup>.

El movimiento de *Mujeres* puede ser entendido como "el conjunto de acciones frente a la sociedad civil y al Estado con el claro propósito de elevar la condición de la mujer y de eliminar la opresión de género"<sup>15</sup>. Aquello del "claro propósito" limita muchas acciones emprendidas por mujeres para "elevar su condición" y "eliminar la opresión de género". Por ello, la visibilidad del movimiento de mujeres durante el Frente Nacional es precaria, a pesar de que ellas estuvieron presentes en muchas luchas sociales con diferentes identidades. Al menos así lo reflejó la prensa de todos los colores consultada. La

10 Desde esa aproximación produjimos el análisis histórico de la formación de la clase obrera colombiana en *Cultura e identidad obrera. Colombia 1910-1945*. Bogotá: Cinep, 1991.

11 Aunque esta perspectiva estaba anclada en la mirada marxista de la identidad de clase (véase, por ejemplo, de E. P. Thompson, *The Making of the English Working Class*. New York: Vintage Books, 1966), generalmente se entendió en forma más estática y determinada desde la 'infraestructura'. Versiones pos-modernas han puesto el dedo en la llaga. Una buena reflexión sobre las identidades colectivas contemporáneas en Chantal Mouffe, *The Return of the Political*. Londres: Ed. Verso, 1993.

12 Lo dicho sobre los indígenas es aplicable con más veras a los negros o afro-colombianos, quienes se hacen visibles como tales en períodos más recientes.

13 Quintín Lame no era indígena puez en sentido estricto, pues tenía mezcla de sangre, pero optó por identificarse como tal y así lo aceptaron quienes lo siguieron. El mismo terminó sus días en el Tolima defendiendo los derechos ya no de tal o cual grupo sino de todos los indígenas colombianos (véase Joanne Rappaport, *The Politics of Memory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, pág 22)

14 Véase Martha C. García, "Descentralización y movilización popular", avance de investigación, Cinep, 1996.

15 Socorro Ramírez, "Las estrategias de sobrevivencia como dimensión del movimiento de mujeres en Colombia", *Boletín Americanista*, Año XXXI, 1989-1990, Nos. 39-40, pág. 186.

dimensión de género que reivindica el movimiento de mujeres sólo se hará explícita en nuestro medio hacia mediados de los setenta, período que escapa al límite cronológico de esta investigación.

Nos resta explicar la inclusión del sector vagamente designado *Empresarial* que no es considerado tradicionalmente en los estudios sobre movimientos sociales en nuestro medio<sup>16</sup>. Por ellos entendemos actores que poseen recursos económicos -bienes de capital- de los que proviene su sustento. Son "independientes" pues no están vinculados a una relación salarial. Cuentan, por lo general, con buena capacidad de presión por sus recursos económicos y su directa representación ante el sistema político. Es evidente que incluye gremios económicos con profundas diferencias en cuanto al acceso de recursos materiales y políticos. Nos referimos a sectores tan disímiles como vendedores ambulantes, pequeños y grandes industriales, comerciantes o transportadores. Aunque muchas veces están presentes en las luchas cívicas, en pos de intereses policlasistas comunes, en otras, que son las que contabilizamos aparte, defienden sus intereses o su independencia económica en relación con el Estado o con otros miembros de la sociedad civil. Sus demandas propias no siempre coinciden con las de la mayoría -caso del alza de tarifas de transporte-, pero hacen parte de la conflictiva existencia de la sociedad civil<sup>17</sup>. Muchos de los incluidos en esta categoría no son sectores populares en el sentido de sufrir explotación económica directa o total exclusión política, pero sus escasas luchas son expresión de otros actores organizados de nuestra heterogénea sociedad<sup>18</sup>.

Visto el panorama de los sectores estudiados, mencionemos brevemente los tipos de lucha cuantificados en esta investigación. Hablamos de seis formas principales de protestas sociales a saber:

- *Paros*: se pueden definir como ceses de actividades explícitos para exigir satisfacción a demandas colectivas. Para los sectores cívicos la referencia a una unidad poblacional (urbana o regional) es central en la definición. En el caso obrero hay más precisión conceptual pues las huelgas son

ceses de actividades económicas con unidad de propósito, generalmente un pliego de peticiones, y de acción, lo que implica simultaneidad en el inicio y en el fin, y por lo general una sola organización que las orienta<sup>19</sup>.

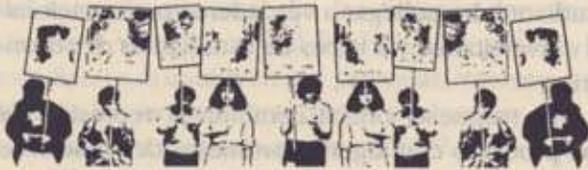
- *Amenaza de paro*: consiste en la expresión directa de la intención de ejercer coerción de no satisfacerse las demandas planteadas<sup>20</sup>.

- *Movilización y toma de instalaciones*: son acciones en las que los demandantes ejercen presión por medio de la ocupación temporal de espacios públicos (calles o edificios). Operativamente distinguimos las anteriores, de aquellas que toman un carácter de enfrentamiento violento (diferente del armado en sentido estricto pues éste se da en el contexto de guerra), como las pedreas, asonadas o levantamientos populares. A estas últimas, a falta de mejor nombre, las llamamos *Protestas violentas*. La distinción práctica entre unas y otras no siempre es posible dada la precariedad o el sesgo de la información de prensa, especialmente cuando se trata de rincones apartados de la geografía del país.

- *Invasiones*: Algunos autores son reticentes a incluir estas acciones en la categoría de protesta, pues supuestamente buscan apropiarse de terrenos urbanos o rurales más que plantear demandas. Nosotros las incluimos pues la revisión de prensa muestra que muchas veces las invasiones se hacen más con el propósito de llamar la atención sobre problemas de ausencia de tierras o vivienda que con el objetivo de apropiarse efectivamente del terreno invadido<sup>21</sup>. De otra parte, la intención de permanecer en el sitio invadido las diferencia de las tomas de entidades o lugares públicos. En el auge de invasiones campesinas del 71 era común la práctica de ingresar a las tierras y apenas llegaba la autoridad y se abría una posibilidad de negociación, se retiraban los invasores. En ese sentido el desalojo no era necesariamente un resultado negativo<sup>22</sup>.

Después de este recuento de categorías teóricas y operativas construidas a lo largo de la investi-

gación para enmarcar sus resultados, es el momento de iniciar el recorrido por las tendencias gruesas de las protestas sociales en el país durante el período del Frente Nacional.



## DESCRIPCIÓN DE LAS TENDENCIAS DE LAS PROTESTAS SOCIALES

Para lograr un mejor panorama de la agitación social entre 1958 y 1974 miraremos, de forma descriptiva, su evolución diacrónica, por sectores y por regiones y grandes centros urbanos.

## Trayectorias anuales

Aunque no hay un ciclo anual como tal en sentido estricto, sí hay ciertas situaciones que tienden a repetirse. La mayoría de los años estudiados suele iniciarse con la agitación de diversas capas populares contra el costo de vida y en particular contra el alza en las tarifas de transporte -a su vez presionada por los dueños de buses o camiones quienes se quejan del aumento de combustibles aprobado con anterioridad por el gobierno de turno. A veces esa protesta es dirigida por los sindicatos y en general predomina la combativa participación estudiantil. Ocurrió también, aunque en menor cantidad, que los sectores populares se solidarizaron con los transportadores en su denuncia sobre el alza de combustible. Los gobiernos de turno acostumbran responder combinando medidas represivas con alguna

- 16 Luis Alberto Restrepo llamaba la atención sobre el papel paradigmático de los gremios empresariales en la sociedad civil, los que demostraban no sólo gran capacidad de presión sino gran autonomía en relación con los partidos políticos ("Relación entre sociedad civil y Estado", *Análisis Político*, No. 9, enero-abril de 1990, págs. 71-72 y 74-75).
- 17 Acogemos aquí la aproximación teórica de Ana María Bejarano sobre el papel del conflicto en la sociedad civil ("Democracia y sociedad civil: una introducción teórica", *Análisis Político*, No. 15, enero-abril de 1992, págs. 83-85). Por otra parte, no habría mucha razón para excluir de nuestro estudio a los sectores empresariales cuando luchan por sus propios intereses, e incluirlos cuando lo hacen por otros, pues deberíamos hacer lo mismo con los otros sectores cuando se comportan en forma particular. El que no haya mucha protesta de estos sectores se debe a que en general les es antipática la acción directa. Muchos gremios -Andi, Fenalco, Asobancaria, Anif, Federación de Cafeteros, etc.- tienen tal poder de presión que con sólo un pronunciamiento les basta para modificar políticas en su favor.
- 18 El énfasis que en el pasado se daba a lo 'popular' se articulaba a su supuesto potencial revolucionario. Pero el concepto de popular estaba impregnado de ambigüedades difíciles de dilucidar más allá del discurso ideológico (Véase Luis A. Romero, "Los sectores populares urbanos como sujetos históricos", *Proposiciones*, No. 19, 1990, págs. 268-278). En forma más elaborada pero todavía con cierta añoranza de sujeto revolucionario, Leopoldo Múnera insiste en el protagonismo del 'movimiento popular' ("De los movimientos sociales al movimiento popular", *Historia Crítica*, No. 7, enero-junio de 1993, págs. 55-80). El que rechazemos vanguardismos apriori o que critiquemos la categoría 'popular' no quiere decir que idealicemos la sociedad civil como si suprimiera las diferencias de intereses y los antagonismos. Más aún, creemos que en su seno existen propuestas más amplias de cambio que otras, más revolucionarias en ese sentido, pero ellas no siempre brotan de los sectores 'populares' a los que, en cualquier caso, habría que definir con mayor precisión. El uso de la categoría 'popular' en este artículo es sinónimo de sectores sociales de bajos ingresos.
- 19 La caracterización amplia de paro está tomada de Javier Giraldo (La reivindicación urbana. *Controversia* Nos. 138-139. Cinep: Bogotá, 1987, pág. 5). La laboral de Alvaro Delgado (*¿Dónde está la clase obrera?*...pág.7). Dejamos de lado la distinción legal entre huelga (la que se hace en el marco de la negociación) y paro (acción por fuera de él) para contabilizar ambas modalidades en una. Es más fácil determinar fechas de inicio y culminación de los paros en el caso laboral que en los otros en donde la información es más escasa.
- 20 Tomada de Martha C. García, *Las cifras de las luchas cívicas*, (Documento Ocasional No. 62). Bogotá: Cinep, 1990, pág. 17. Creemos que es una categoría útil para las luchas cívicas, pero que pierde significación por el uso frecuente (y en general sin consecuencias) en otros sectores. Por ello sólo las contabilizamos para las acciones cívicas. Su importancia cualitativa está en un nivel inferior al paro efectivo pero no deja de ser un instrumento de presión efectivo en las acciones cívicas.
- 21 Martha C. García no las incluye en sus cifras, mientras Alfonso Torres (*La ciudad en la sombra*) habla por separado de las invasiones y de las protestas urbanas en Bogotá.
- 22 Siguiendo a León Zamosc (*Los usuarios campesinos...*) contabilizamos la invasión de cada finca como una acción separada así se produzca simultáneamente en otras fincas. Lo mismo hicimos con relación a los barrios o zonas urbanas a no ser que sean colindantes. Esto puede distorsionar un poco las cifras de luchas especialmente para los años de auge de este tipo de acción. Por otra parte la prensa no discrimina mucho las invasiones cuando el fenómeno se masifica. Más precisión encerraba la base de datos de Zamosc sobre la que construyó sus estadísticas de luchas campesinas de los setentas, base que desafortunadamente desapareció.

promesa de incremento del salario mínimo o de posponer el alza de combustibles y de transporte, anunciando en forma simultánea a los empresarios de ese sector posibles aumentos del subsidio respectivo. El desenlace depende de la presión popular que se ejerza. Cuando las centrales sindicales son las que coordinan la protesta el gobierno responde con mayor celeridad.

Esas protestas iniciales están acompañadas generalmente por discusiones de pliegos de petición de los sindicatos, algunos rezagados del año previo, y en no pocas ocasiones esas negociaciones derivan en huelgas. Hacia la mitad de semestre los estudiantes suelen lanzarse a protestas de corte aca-

démico o presupuestal, pero generan un proceso que como bola de nieve se acrecienta: hay protestas violentas que son reprimidas, algunos estudiantes son detenidos y los restantes se lanzan a movimientos que cada vez involucran mayor población estudiantil, hasta llegar a verdaderos paros nacionales universitarios y a veces de estudiantes de secundaria.

La respuesta oficial combina la represión de esas protestas con algunas promesas de solución o reforma. Pero a veces es tan virulenta la confrontación que se recurre al cierre del establecimiento educativo o a decretar vacaciones anticipadas. Los choques violentos parecen ser más intensos en las

**CUADRO 1**  
**PROTESTA SOCIAL POR MODALIDADES, 1958-1974**

AÑOS	Paros	Paros con tomas	Amenaza paro	Movilización	Invasión	Protesta violenta	Toma	TOTAL
1958	38	-	2	2	4	-	-	46
1959	72	-	2	21	26	12	-	133
1960	69	-	1	11	11	2	-	94
1961	71	-	6	7	32	3	-	119
1962	85	1	10	8	7	5	-	116
1963	122	-	5	9	4	9	-	149
1964	122	2	8	15	10	6	-	163
1965	128	2	9	9	5	11	-	164
1966	142	3	17	15	8	13	-	198
1967	91	-	11	23	6	4	-	135
1968	83	3	7	12	9	5	-	119
1969	118	4	27	24	17	20	2	212
1970	119	-	6	15	26	11	-	177
1971	106	8	6	15	384	19	1	539
1972	125	1	5	11	37	16	1	196
1973	92	1	14	20	24	25	-	176
1974	138	6	10	37	71	28	5	295
<b>TOTAL</b>	<b>1721</b>	<b>31</b>	<b>146</b>	<b>254</b>	<b>681</b>	<b>189</b>	<b>9</b>	<b>3031</b>

Fuente: Bases de datos de Mauricio Archila (anexo) y Alvaro Delgado para huelgas.

vísperas electorales (que por lo general son los primeros semestres de los años pares). Luego del cierre de algunas universidades, públicas casi siempre, se apacigua un poco la movilización estudiantil, o mejor se la pospone, para revivirla hacia la mitad del segundo semestre. En los tiempos correspondientes a vacaciones y al final de año, cuando los estudiantes disminuyen sus protestas, vuelven a sobresalir los movimientos cívicos y laborales, que en todo caso son los más permanentes<sup>23</sup>.

El año termina, por lo general, con un par de huelgas que "mojan" prensa (no es extraño encontrar a los maestros o a los trabajadores del sector salud en esas bregas), y algunos movimientos cívicos en comarcas apartadas. Tampoco es inusual encontrar a los transportadores ejerciendo nueva presión para lograr la autorización del aumento de tarifas del siguiente año.

Para visualizar las trayectorias anuales contamos con el Cuadro 1 que resume la información recopilada en torno a las formas de lucha investigadas. Se destaca el peso de los paros en el conjunto de las protestas, más de la mitad del total, y en particular de las huelgas laborales que fueron, según los datos de Alvaro Delgado<sup>24</sup>, 1.082, un poco más de la tercera parte. Aunque esto puede reflejar un sesgo de las fuentes consultadas -los paros o huelgas son más noticia que una movilización pacífica- también indica la constancia de la protesta del movimiento laboral. Las invasiones tomarán fuerza hacia el final del régimen bipartidista por razones que miraremos luego. Las cifras muestran en conjunto 3.031 protestas para 17 años con un promedio de 178 por año, algo así como una protesta cada dos días.

A continuación destacaremos la información cualitativa que no es explícita en este cuadro y que ayuda a la mirada global del período estudiado. La

agrupación por cuatrienios se debe al privilegio analítico que queremos darle a la variable política en la lectura de las dinámicas de protesta social, más que al cómodo recurso de correspondencia con períodos presidenciales.

### 1958-1962:

En estos cinco años incluimos el primero por ser transición de la Junta Militar al gobierno inaugural del Frente Nacional. En general, son los años que menos protestas demuestran (y no creemos que ello se deba a un descuido de la prensa en notificarlas). La razón principal radica en la esperanza que representaba el retorno a la democracia, por más limitada que fuera, y el prestigio personal de Alberto Lleras Camargo. Por ejemplo, durante 1958 se presentaron solo 15 huelgas y una movilización laboral, y 30 protestas de otros sectores no sindicales; es el menor número de luchas en los años estudiados aunque es un poco mayor que 1957<sup>25</sup>. Lo más significativo es que esas acciones disminuyeron notablemente cuando Lleras Camargo se posesionó en agosto de ese año. Fue sin embargo, un año alto en paros cívicos, 10 en total, y con un énfasis estudiantil debido a la lucha contra los rectores autoritarios "herederos de la dictadura".

En 1959 observamos el "ciclo" típico descrito en páginas anteriores. De hecho, fue el más agitado del primer gobierno del Frente Nacional. Se inicia con protestas contra el transporte, lideradas por quienes conformarán luego el MOEC (Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino). Las luchas cívicas acompañan esta temprana movilización. Las invasiones urbanas y rurales toman cierta fuerza. Para mayo repunta el movimiento laboral, que tuvo 50 huelgas y mostró al Valle como epicentro de la lu-

23 Nos interrogamos sobre la existencia de posibles ciclos en la discusión de pliegos y/o en las huelgas, máxime sabiendo que la frecuencia mayor de vigencia de las convenciones colectivas es de dos años. Pero no hubo evidencia de tales ciclos, conclusión a la que ya había llegado Delgado entre otras razones porque no todas las huelgas se lanzan en el marco de la negociación de pliegos. (*¿Dónde está la clase obrera?*)

24 Ibid, pág 133.

25 Para comparaciones con el período previo véase nuestro ensayo "Protestas sociales durante la Violencia", *Historia Crítica*, No. 11, julio-diciembre de 1995, págs. 63-78.

cha, mientras decae la agitación cívica y poco se manifiesta la protesta estudiantil -todavía estaba en luna de miel con el Frente Nacional- aunque sobresale el conflicto en torno al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena. En agosto, corren versiones de unidad entre UTC y CTC que terminan en meros rumores. Hubo un par de movilizaciones de mujeres, una claramente política en pro del acuerdo bipartidista y otra para clamar por la paz.

El año de 1960 se inicia con paros obreros, para presionar pliegos, y paros estudiantiles, contra las autoridades universitarias. Se presentan los primeros paros generales de la Universidad Nacional, uno de



los cuales tumba al rector Mario Laserna. Disminuye el número de paros cívicos, registramos 5 nada más, aunque las invasiones a suelos urbanos continúan, especialmente en Barranquilla. La CTC se ve cada vez más dividida en vísperas del Congreso en Cartagena que expulsará, con el aval oficial, a los sindicatos comunistas. La división sindical, en este caso presionada desde arriba, se manifiesta con crudeza.

El siguiente año comienza con una agitación cívica sin precedentes, en la que se destacan las invasiones urbanas y algo las rurales. Hacia marzo comienzan las huelgas universitarias en las que sobresale la de la Universidad de Medellín (una de las privadas más combativas). En mayo se presenta el primer gran paro universitario desde las jornadas de mayo del 57, pero esta vez ya enfrentado al Frente Nacional. En el segundo semestre se vivieron dos huelgas dramáticas: la de Avianca y la de banqueros (la primera en su historia). El Valle seguía siendo la región más conflictiva, tanto en el plano laboral -continuación tímida de la agitación azucarera de los años anteriores- como en el cívico.

El último año de este subperíodo arranca con un movimiento huelguístico del magisterio que en parte era rezago del anterior. La clientelización de la educación hacía mella pues desde su nacionalización en 1960, los gobernadores hacían los nombramientos pero el gobierno pagaba, con deficiencia, los salarios<sup>26</sup>. Hacia mediados de semestre hay agitación estudiantil, al principio de secundaria, en especial en la Costa, y luego universitaria. Los cementeros conmueven a la opinión pública con sus paros bien coordinados al entrar el segundo semestre. Las invasiones rurales que se habían visto anteriormente disminuyen en este año por la expedición de la ley 135 de 1961 o de Reforma Agraria. La protesta cívica renace al final del año y deja una cifra total de 11 paros. Los transportadores y vendedores ambulantes fueron muy activos en ese año con 15 protestas, una de las más altas cifras en el Frente Nacional. No se perciben transformaciones cuantitativas en los registros de la protesta en relación con el cambio presidencial que se produjo en agosto de ese año.

## 1963-1966:

El año de 1963 se inicia en forma simultánea con la agitación contra el alza de transporte y con los "paros" gremiales, especialmente de transportadores, que el gobierno designa como paros cívicos. Sigue la ola huelguística, especialmente en el Valle y el 23 de febrero se da la masacre de cementeros en Santa Bárbara, Antioquia. La justicia no juzga a los responsables militares, a pesar de los 12 muertos de ese ingrato sábado<sup>27</sup>. Luego viene un paro petrolero de grandes proporciones que en Barranca se prolonga como paro cívico<sup>28</sup>. El semestre culmina con nuevas agitaciones cívicas, de estudiantes de secundaria y de la Universidad Nacional. En el segundo semestre, decae un tanto la movilización cívica que marca la cifra de 10 paros, y retorna la agitación laboral, la más alta hasta el momento. De hecho, en el plano laboral se inicia el auge huelguístico que se prolongaría por un par de años más.

1964 comienza con la consabida riña entre transportadores y usuarios por las tarifas, con el arbitraje del gobierno. Pero en realidad, éste provocó la reacción en cadena al subir los precios de la gasolina y combustibles. Era parte del ritual anual en el cual cada una de las partes contaba con poderosas razones para recurrir a la acción directa. En el primer semestre la pauta la fija el movimiento obrero en ascenso. En mayo repuntan los estudiantes con agitación antielectoral. El conflicto propiamente universitario más destacado, y según Francisco Leal, el mejor organizado, fue el de la UIS (Universidad Industrial de Santander) que culminó en una dramática marcha de Bucaramanga a Bogotá, lo que descongeló la negociación y precipitó la renuncia del rector Villa-

real<sup>29</sup>. La otra universidad que vivió un conflicto prolongado fue la Libre, pero las razones eran más políticas -división liberal- que académicas. Hacia octubre reviven los movimientos cívicos y en noviembre se producirá el ataque de los estudiantes al entonces candidato Lleras Restrepo en la Universidad Nacional, lo que marcará la mutua animadversión.

El siguiente año muestra un aumento general de las protestas: las huelgas suben a 93, los paros cívicos llegan a su máximo en el período estudiado -según nuestro recuento-<sup>30</sup>, con la cifra de 14 registros. Se inicia con una agitación nacional, liderada por las centrales UTC y CTC, contra la propuesta oficial de impuesto a las ventas. La segunda confederación se retira con rapidez de la escena y la primera se mantiene firme, con apoyo de los sindicatos influidos por la izquierda, hasta el 23 de enero, la víspera del proyectado paro, que se produce en forma muy reducida, a pesar de que el gobierno pospone el mencionado proyecto de impuesto. El semestre continúa con cierta agitación cívica en el marco de la cual se producen una ambigua marcha contra la violencia (a veces invocando la presencia del ejército, a veces contra los secuestros). En mayo y junio repunta la protesta estudiantil provocada por la invasión norteamericana a la República Dominicana. El gobierno responde con la reimplantación del estado de sitio. Coincide esta ola de agitación estudiantil con el inicio de la actividad política de Camilo Torres, una vez reducido al estado laical. En el segundo semestre hay mayor presencia de conflictos laborales y hacia el final de cívicos. El 5 de septiembre, el sindicalismo logró enterrar finalmente la 'cláusula de reserva', dispositivo heredado de la dictadura que atentaba contra la estabilidad laboral al permitir despidos sin causa justa.

26 Alvaro Delgado, *¿Dónde está...?*, págs. 79-80.

27 Un análisis y descripción detallada de los sucesos en Centro de Investigaciones Mariategui, *La masacre de Santa Bárbara*. Medellín, Ed. La Pulga, 1977.

28 El recuento de las luchas del puerto petrolero, en Jairo Chaparro, "Recuerdos de un tropelero", *Documento Ocasional* No. 63. Bogotá: CINEP, 1991.

29 Véase "La participación política de la juventud universitaria como expresión de clase" en Varios, *Juventud y política en Colombia*. Bogotá: Fescol, 1984.

30 Las estadísticas de Medófilo Medina ("Los paros cívicos...", 1977), comúnmente aceptadas por los investigadores del ramo, están en general por debajo de las nuestras, salvo para el año de 1974.

El último año considerado, 1966, fue el más conflictivo en términos laborales en todo el Frente Nacional (114 huelgas), y uno de los más activos para los otros sectores. Como es habitual, se inicia con la discusión sobre el posible aumento de las tarifas de transporte. Sigue la agitación cívica y luego toma fuerza la sindical especialmente del magisterio y del sector salud. De hecho, la movilización laboral será permanente a lo largo del año. Al promediar el primer semestre los estudiantes se lanzan a las calles a protestar por problemas presupuestales de las universidades.

En ese momento toma fuerza en algunas zonas del país una movilización que gira en torno a la creación de nuevos departamentos (Risaralda y Sucre principalmente). Hay grupos que apoyan la partición y otros que se oponen casi con igual vehemencia; unos amenazan con paro y otros lo adelantan efectivamente. En el segundo semestre, una vez posesionado Carlos Lleras Restrepo, disminuyen un tanto los conflictos sociales, aunque algunos persisten. Tal es el caso estudiantil en donde, además de la huelga de la Universidad de Antioquia, que comenzó contra un decano y derivó en paro de toda la universidad con la toma de las instalaciones, se presentó la retención por unas horas del mismo Lleras y del señor Rockefeller en las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Este hecho, traería tremendas consecuencias pues el presidente en respuesta iracunda no sólo cerró la Universidad sino que suprimió de un plumazo a la Federación Universitaria Nacional (FUN), ente creado tres años. El movimiento estudiantil quedaría acéfalo en términos gremiales a raíz de esta confrontación, lo que radicalizó el proceso. Hacia fines de año el movimiento cívico volvió a repuntar en agitación.

#### **1967-1970:**

En el período de Lleras Restrepo, aunque los indicadores de protesta muestran una tendencia a disminuir, especialmente en el sector laboral, la curva se transforma a partir del 69. Las razones de esta

inflexión no son claras e incluso pueden ser contradictorias, -agotamiento del reformismo o dinamización social fruto de la reforma administrativa del año anterior. Veamos año por año algunas características de este cuatrienio que refleja de todas formas una mayor capacidad de control social por parte del régimen.

El primer año, 1967, se inicia con la habitual tensión en torno al aumento de transportes, con la particularidad de que se prolonga hasta bien avanzado el primer semestre. El sector laboral marca de nuevo la iniciativa con huelgas magisteriales (desde el año anterior Fecode impartió la consigna de parar si se atrasaban los pagos)<sup>31</sup>, del sector salud (también por la manifiesta precariedad presupuestal) y de la industria manufacturera. La agitación estudiantil disminuye marcadamente tal vez por la represión aludida, mientras el sector cívico mantiene su presencia en especial al final del año.

En 1968, hay presión de transportadores por el alza de tarifas, pero sin ir a la acción directa por este motivo. Los conflictos laborales disminuyen a los niveles de principios del decenio. El sector estudiantil, por el contrario, repunta a partir de marzo y se mantiene activo a lo largo del año. A finales de noviembre se hace intensa la movilización de estudiantes de secundaria, en particular en el Valle.

El siguiente año muestra gran agitación cívica y estudiantil, las segundas en cifras durante el Frente Nacional. El año se inicia con la discusión de abundantes pliegos de petición y con fuerte agitación cívica contra el costo de vida. Se presentan amenazas de paro general lanzadas por las centrales UTC y CTC que terminan negociando con el gobierno; se presentó, sin embargo, paralización efectiva en el Valle y Antioquia impulsada por los sindicatos influidos por la izquierda. Entre marzo y mayo hay gran agitación estudiantil universitaria y secundaria, que resurge en el segundo semestre. La respuesta oficial tiende a ser el cierre de colegios o universidades con lo que se debilita la calidad de la enseñanza en los centros afectados. Desde agosto hay una nueva movilización cívica en la cual se destaca la participación del clero en especial de los curas del movimien-

to 'Golconda'. En el sector laboral sobresale la presión unitaria de cerveceros y cementeros, estos últimos orientados por los comunistas. El año es también significativo por el número de amenazas de paros cívicos, el mayor de todo el Frente Nacional, y por la aparición de formas más radicales de lucha que se prolongarán por el resto de años como las protestas callejeras violentas y las tomas de instalaciones. Esto coincide con la creciente polarización social en la culminación del régimen bipartidista.

Aunque 1970 no fue un año particularmente notorio en número de conflictos abiertos sí resalta por la radicalidad y resonancia de algunos. Se inicia con nuevas huelgas de cerveceros, médicos y maestros. A lo largo del año, el recién fundado MOIR (Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario) y sectores sindicales no confederados amenazan con un 'paro patriótico' sin que realmente se produzca y menos se conozca su real motivación -¿antielectoral o meramente laboral? ¿cívico u obrero?. Algunos paros estudiantiles iniciados el año anterior continúan en el primer semestre aunque ahora con el ingrediente antielectoral en vísperas del 19 de abril. El aparente robo electoral a la ANAPO produce crudos enfrentamientos callejeros. En el segundo semestre resalta la radicalización del movimiento campesino cada vez más distanciado del gobierno. Los sectores terratenientes denuncian un plan nacional de invasiones ante la generalización de ellas. También llama la atención la persistente tensión entre los departamentos de Nariño y el Valle en torno a la ubicación de la refinería de petróleo de la Texas<sup>32</sup>.

#### 1971-1974:

El último cuatrienio estudiado es el que más luchas sociales ofrece. Con seguridad influye en estas altas cifras el desgaste del Frente Nacional representado por un presidente conservador elegido en unas

disputadas y no del todo claras votaciones. Los fenómenos novedosos en estos años finales del Frente Nacional radican en la irrupción del campesinado, que deseaba presionar una Reforma Agraria cada vez más 'embolatada', y la mayor visibilidad de los indígenas del Cauca en la recuperación de sus resguardos. La preponderancia del sector sindical en los conflictos se diluye en este cuatrienio sugiriendo la aparición de nuevos protagonismos populares.

En ese panorama sobresale 1971 como el año más combativo de todo el Frente Nacional y no propiamente por la presencia obrera, muy por debajo de otros años. Es de destacar, sin embargo, el paro nacional convocado por UTC y CSTC para el 8 de marzo. Fue precedido de un paro general del magisterio, de la más impresionante ola de invasiones de predios rurales a finales de febrero, de paros cívicos de envergadura como el de Barranca y del inicio del conflicto universitario más resonante de todo el período, el de la Universidad del Valle. En febrero y marzo, por tanto, fue cuando se vivió lo más cercano a un desafío al régimen político desde los movimientos sociales. Ese año marca la máxima cifra de luchas estudiantiles y campesinas. El denunciado plan de invasiones se llevó a cabo en casi todos los departamentos del país, sobresaliendo los de la Costa. El gobierno respondió con una doble táctica de represión y traslado al Incora de las situaciones conflictivas. Se cuajaba, sin embargo, una contrarreforma agraria.

Por su parte el conflicto de la Universidad del Valle contra la injerencia norteamericana en la educación superior se generalizó prácticamente a todas las universidades del país, incluidas las privadas como los Andes y la Javeriana. Las peticiones se definieron en torno al Programa Mínimo hecho por los estudiantes reunidos en Cali que apuntaba a la lucha contra el Plan Básico y en concreto por la recomposición de los Consejos Superiores con representación estudiantil y profesoral. El gobierno

31 Alvaro Delgado, *¿Dónde está...?*, pág. 80.

32 Este tipo de choques regionales me recordó los encontrados en los años veinte a propósito de la construcción de obras de infraestructura como lo constaté en mi ensayo "Los movimientos sociales entre 1920 y 1924", *Cuadernos de Filosofía y Letras*, Vol. III, No. 3, julio-septiembre de 1980.

además de reimplantar el estado de sitio tuvo una salida reformista. En la cabeza del ministro de Educación, Luis Carlos Galán, replicó con una reforma universitaria que implicaba un cierto 'cogobierno' en los centros docentes públicos.

En el sector laboral tuvo resultados muy favorables la amenaza de paro general de marzo pues agilizó la negociación de muchos pliegos sin tener que recurrir a la huelga. En el segundo semestre, en Barranca se volvió a vivir la agitación pero en este caso de los trabajadores petroleros. Las invasiones rurales continuaron en el país aunque con menor intensidad lo mismo que las acciones cívicas que contabilizaron 15 paros en ese año.

1972 se inicia con una relativa 'paz' social que se ve amenazada por la contraofensiva agraria acordada por el gobierno y los terratenientes en El Chicoral en enero. Hay de nuevo invasiones pero en menor escala con relación al año anterior. Los obreros vuelven a recurrir a la huelga, tal vez porque la coyuntura política no es propicia para la negociación laboral. De hecho, ese año muestra un alto porcentaje de conflictos por violación de previos convenios o leyes, situación diferente a la tendencia durante el Frente Nacional que fue acudir a la huelga en el marco de la discusión de pliegos. Los estudiantes se mueven de nuevo en las cercanías de las elecciones de 'mitaca'. Las protestas estudiantiles del final de año producen como reacción el desmonte del cogobierno y la designación de rectores tachados de 'policías' en las universidades públicas más conflictivas. Los paros cívicos, que suman 12 ese año, muestran una dimensión regional que tiene mucha resonancia (Magdalena medio, Sarare,

Arauca, Caquetá, Meta, Boyacá y Putumayo). En muchos de ellos participa la ANUC como principal organizadora, reflejando cierto protagonismo campesino.

El año siguiente fue el de menor número de protestas del cuatrienio. Parece que el bipartidismo retoma el control social y político, máxime con el bajón electoral de la Anapo. En casi todos los sectores disminuye la agitación, con excepción de los empresarios del transporte que vuelven a sus andanzas para presionar alzas de tarifas. El movimiento estudiantil repunta sólo en el segundo semestre y con mayor timidez que en años anteriores. Se destacan las movilizaciones en protesta por la caída de Allende en septiembre.

Finalmente, 1974 es de nuevo un año de gran agitación, el segundo de todo el Frente Nacional. De una parte se insinúa un nuevo ciclo huelguístico que tendrá como pico el siguiente año con 125 huelgas<sup>33</sup>. Sobresalieron en ese año los paros de médicos y del sector salud en general. De otra parte hay un repunte cívico y de sectores empresariales, con las máximas cifras de agitación de los 17 años considerados. Los movimientos campesino y estudiantil muestran un pequeño incremento, pero se ve claro que su "cuarto de hora" ya había pasado. Las invasiones rurales retornan pero concentradas en pocos departamentos. Los paros estudiantiles se presentan sólo en el segundo semestre. En general se observa que recién posesionado el primer presidente posterior al Frente Nacional, Alfonso López Michelsen, disminuye el ritmo de la protesta, salvo en el caso cívico que registra 18 paros cívicos. Las promesas lopistas hacen que la gente dé un margen de espera en sus demandas, que pronto se agotará, pero esa es una historia posterior.



### Tendencias sectoriales:

Consideradas, a grandes rasgos, las trayectorias anuales de la protesta social durante el Frente Nacional, conviene realizar una mirada somera sobre el comportamiento de los distintos sectores sociales estudiados. Para ello nos apoyaremos en la información condensada en el cuadro 2.

#### Laboral

Lo primero que salta a la vista al mirar el citado cuadro es el peso y la regularidad de las protestas laborales, especialmente de las huelgas, en el conjunto de la agitación social de esos años. Independientemente de que su figuración pueda ser debida a una mayor atención de la prensa o a una mejor cuantificación de sus luchas, no deja de ser curioso constatar su primacía, por lo menos hasta 1969. Por doce años, más de la mitad de los conflictos abiertos fueron liderados por este sector. El cambio ocurrido ese año, a su vez, puede anunciar transformaciones en los protagonismos populares. No puede servir esta constatación para postular en forma apresurada e ideológica un vanguardismo proletario, pero es dicente del peso que el mundo obrero tuvo en la protesta popular hasta los años sesenta. Tampoco esta afirmación rebate la hipótesis generalizada, que compartimos, sobre la debilidad estructural

dientemente de que su figuración pueda ser debida a una mayor atención de la prensa o a una mejor cuantificación de sus luchas, no deja de ser curioso constatar su primacía, por lo menos hasta 1969. Por doce años, más de la mitad de los conflictos abiertos fueron liderados por este sector. El cambio ocurrido ese año, a su vez, puede anunciar transformaciones en los protagonismos populares. No puede servir esta constatación para postular en forma apresurada e ideológica un vanguardismo proletario, pero es dicente del peso que el mundo obrero tuvo en la protesta popular hasta los años sesenta. Tampoco esta afirmación rebate la hipótesis generalizada, que compartimos, sobre la debilidad estructural

**CUADRO 2**  
**PROTESTAS SOCIALES POR SECTORES, 1958-1974**

AÑOS	Laboral	Cívico	Campesino	Estudiantil	Indígena	Empresarios	Mujeres	TOTAL
1958	16	10	4	13	-	3	-	46
1959	52	38	22	19	-	-	2	133
1960	44	21	8	20	-	1	-	94
1961	46	39	14	17	-	3	-	119
1962	48	27	4	22	-	15	-	116
1963	78	28	6	29	-	8	-	149
1964	91	30	4	33	-	5	-	163
1965	93	39	1	28	-	3	-	164
1966	115	39	6	36	-	2	-	198
1967	71	33	8	16	-	5	1	135
1968	48	17	6	40	-	8	-	119
1969	59	68	12	63	1	8	1	212
1970	67	28	24	49	1	8	-	177
1971	48	49	366	65	2	8	-	539
1972	76	33	31	52	1	3	-	196
1973	62	44	20	33	4	11	2	176
1974	105	78	52	40	3	16	1	295
<b>TOTAL</b>	<b>1119</b>	<b>621</b>	<b>588</b>	<b>577</b>	<b>12</b>	<b>107</b>	<b>7</b>	<b>3031</b>

Fuente: Bases de datos de Mauricio Archila (Anexo) y Alvaro Delgado (para huelgas)

del movimiento obrero colombiano en esos años. Tanto en términos comparativos con países de similar desarrollo económico, como en términos políticos de desafío al régimen, nuestra clase obrera fue sin duda débil, pero constante<sup>34</sup>.

En forma descriptiva se observan dos ciclos de ascenso huelguístico: 1963-1966 y 1972-1975 (ver también cuadro 3). Los sectores que más aportaron conflictos abiertos fueron precisamente los que tenían prohibida la huelga: magisterio y sector salud, y los bancarios<sup>35</sup>. También tuvo presencia la industria manufacturera, donde la huelga era permitida dentro de ciertos parámetros legales. El sector transportes, históricamente el más conflictivo hasta los cincuenta, pierde peso relativo. Por esa misma vía no es extraño constatar que los sectores más conflictivos -pertenecientes a la CSTC y a los no confederados- fueron influidos por la izquierda. La legislación sobre la huelga sufrió transformaciones en estos años: se dilató el período previo a su lanzamiento y se le interpuso el recurso de los tribunales de arbitramento como alternativa al paro. Los obreros se quejaban de que en estos tribunales quedaban en desproporción ante los delegados del Estado y los empresarios. La categoría de 'servicio público', para la cual estaba prohibida la huelga, se extendió aún a sectores privados como los bancarios. Recurrir a la huelga en forma legal, por tanto, fue cada vez más difícil, lo que sugiere dosis crecientes de desinstitucionalización del movimiento laboral.

En términos de motivos del conflicto sobresale a lo largo del período la negociación de pliegos, pero desde 1970 aumenta el peso de la huelga por violación de convenios o leyes. Si lo primero implica un uso "legal" de la huelga, lo segundo refuerza la idea de la creciente desinstitucionalización del sindicalismo. El peso de los paros por solidaridad es pequeño, lo mismo que el de las huelgas "políticas". Aparentemente el sindicalismo luchó más por razones económicas, tales como salarios y empleo, aunque, con la abolición de la cláusula de reserva en 1965, este último motivo disminuye en importancia. Sin embargo, esta hipótesis debe ser sopesada con cuidado como haremos en la siguiente sección de este informe.

## *Campeños*

Las cifras de las que disponemos muestran dos momentos de agitación campesina: 1959-1961 y de 1969 en adelante. En el primer caso se trató de invasiones y conflictos en zonas de reciente violencia, especialmente en Cundinamarca y Tolima. La intención era presionar la expedición de la Reforma Agraria. En el otro momento se produce una creciente visibilidad desde finales del gobierno de Lleras Restrepo quien creó la organización de Usuarios Campesinos para presionar la ejecución de la mencionada Reforma. En 1971, especialmente en febrero, se dio el mayor auge de invasiones de tierras visto en el país<sup>36</sup>. Incluso en ese año el campesinado le arrebató el protagonismo a los otros sectores populares.

Así la invasión no sea siempre para apoderarse de tierras sino para llamar la atención, no deja de ser una forma de lucha que va más allá de lo meramente legal y cuestiona la propiedad privada. Lo curioso es que los funcionarios del gobierno, aunque rechazaron esta forma de acción directa, intentaron comprenderla y hasta le dieron cierta legitimidad. A raíz de algunas invasiones en el Guamo, Tolima, en octubre del 70, el gerente del Incora dijo que esas acciones eran fruto de la desesperación de quienes sufren el problema del minifundio y se quejó de que algunos hacendados no contribuían a la solución negándose a la venta de sus predios. En febrero de 1971, en plena oleada invasora, J. E. Valderrama, ministro de agricultura, opinó que mientras existiera la actual estructura de la tenencia de la tierra, se presentarían invasiones y habría inquietud entre los campesinos, pero agregó que el gobierno estaba actuando en forma acelerada en favor de aquellos que no tenían tierra<sup>37</sup>.

En los años que siguen, al menos hasta 1974, se nota una indudable disminución de esta forma de lucha. La explicación es múltiple y ya ha sido esbozada por quienes han trabajado este movimiento: el cambio de política oficial condensado en el Pacto de El Chicoral y la mayor represión oficial; la heterogeneidad interna y las divisiones sociales; las diferencias regionales y de tipo de "economía cam-

pesina"; y el vanguardismo de la izquierda que divide aún más al movimiento agrario<sup>38</sup>.

La historia de la ANUC no ha sido del todo esclarecida pero en un principio jugó un papel "político" similar al de la CTC durante la Revolución en Marcha de López Pumarejo -la organización de masas del Partido Liberal-, en especial en nacientes departamentos como Sucre. La ruptura de sus dirigentes con el bipartidismo y la división agenciada oficialmente, marcan una diferente orientación política de la ANUC, pero el intento de instrumentalización política continuó, ahora por parte de la izquierda. Tal vez Orlando Fals Borda exagera al caracterizarla como la mayor organización de masas de la historia nacional, pero sí encarnó la mayor movilización social de campesinos de este siglo<sup>39</sup>.

#### Sectores cívicos

Sus protestas muestran una tendencia menos cíclica que otros sectores. Se percibe sin embargo, un constante aumento con dos picos, en 1969 y 1974. En ambos casos parece que las demandas inmediatas se agudizan con cambios en el panorama político: en 1969, por la búsqueda de recursos locales en el marco de la previa reforma administrativa y en 1974, por el desmonte del Frente Nacional.

La mayoría de las protestas cívicas fueron ocasionadas por servicios públicos, en su orden, por problemas de cobertura, de tarifas y, en menor escala, de calidad<sup>40</sup>. Dentro de los servicios públicos el más demandado fue la energía eléctrica y luego el acueducto, muy lejos está el aseo y la salubridad pública; sobre teléfonos es muy poco lo que se exigió en esos años. El segundo renglón grueso de demandas fue el de obras públicas (carreteras, calles y en menor medida aeropuertos y adecuación de puertos). El cambio de autoridades locales es también un fuerte motivo de movilización. Hubo algunas protestas por cambios de párrocos o sacerdotes locales. Muy pocas en torno a gobernadores y ninguna que explícitamente pidiera la renuncia del presidente de turno. La educación (construcción o adecuación de escuelas y nombramiento de maestros) ocupa un cuarto lugar en las demandas de esos años. De menor intensidad fueron las luchas por servicios de salud (construcción y adecuación de hospitales y nombramiento de médicos).

Las protestas de carácter local fueron mucho más abundantes, pero las regionales más impactantes<sup>41</sup>. Sobre este punto volveremos en el siguiente acápite. En comparación con las luchas campesinas y estudiantiles, las movilizaciones cívicas tienden a tener más éxito en los puntos solicitados, que, por

34 En esto coinciden los analistas del mundo laboral (Alvaro Delgado, *¿Dónde está...?* y Daniel Pecaut, *Crónica de dos décadas de política colombiana, 1968-1988*) y del régimen político (desde Robert Dix, *Colombia, the Political Dimensions of Change*. New Haven: Yale University Press, 1967 hasta Jonathan Hartlyn, *La política del régimen de coalición*. Bogotá: Tercer Mundo-Uniandes, 1993). A modo de ilustración podemos añadir un par de comparaciones sobre el movimiento huelguístico en otros países latinoamericanos. En 1959, por ejemplo, en Brasil hubo 954 huelgas (Ruth B. Collier y David Collier, *Shaping the Political Arena*. Princeton: Princeton University Press, 1991, pág. 388). En Chile, durante los 17 años estudiados hubo un crecimiento lento entre 1958 y 1965 pasando de 102 a 723 huelgas. En los años siguientes las sumas eran superiores a los mil y durante el gobierno de Allende fueron de 2.699 para 1971, 3.325 en 1972 y 2.050 antes de su caída en septiembre de 1973 (Alberto Cuevas, *Sindicato y poder en América Latina*. Madrid: Alianza editorial, 1985, 207). En países más cercanos al nuestro se observa que, por ejemplo, para 1970, Perú tuvo 345 huelgas y Venezuela 64 (ibid, págs. 249-251).

35 El conflicto con los sectores estatales llama la atención del investigador norteamericano Hartlyn, quien le atribuye peso en la pérdida de credibilidad del Estado (La Política... págs. 222-228)

36 La base de datos de invasiones de León Zamosc, que sólo cubre los años setenta (el período de la ANUC) muestra cifras superiores a las nuestras pero coincidentes en la tendencia. Para 1971 señala 645 invasiones, 54 para el 72, 51 para el siguiente año y 123 para 1974 (Los usuarios..., pág. 53).

37 El Tiempo, 29 de octubre de 1970, págs. 1 y 6; y 24 de febrero de 1971, pág. 6.

38 El estudio más completo y satisfactorio en términos explicativos es el ya citado de Zamosc (*Los usuarios...*)

39 Orlando Fals Borda, *Historia doble de la Costa*, Vol. IV. Bogotá: Valencia eds., 1986, pág. 170B.

40 En la base de datos del anexo aparecen catalogadas así: cobertura es C, calidad es K y tarifas T.

41 En muchas acciones cívicas se invocó la convocatoria de cabildos abiertos. Medófilo Medina (*La Protesta Urbana*, Bogotá: Ed. Aurora, 1984), menciona la apelación a esta tradición, como una forma de convocar a la multitud, en las protestas a lo largo del siglo.

lo general, son muy precisos. Las protestas cívicas, y los paros dentro de ellas, tienden a expresarse en mayor cantidad en las ciudades pequeñas, luego en las intermedias y definitivamente poco, salvo invasiones de suelos urbanos o en paros barriales, en las grandes ciudades. En cuanto a invasiones de lotes sobresalen Cali, Barranquilla e Ibagué. Como lo ilustra Alfonso Torres, en Bogotá la invasión no fue la forma de acceder a la vivienda entre los habitantes más pobres, por el contrario, aquí se prefieren tácticas de menor confrontación<sup>42</sup>. Las invasiones urbanas tuvieron su auge a principios del Frente Nacional y en sus estertores. En el último período parece que influyó el ejemplo campesino o que algunas invasiones se produjeron en municipios con zonas en el umbral entre urbanas y rurales.

Con el ánimo de escudriñar sobre la relación entre paros cívicos y huelgas, tema recurrente en la literatura sobre el tema, construimos el cuadro 3.

**CUADRO 3**  
**Huelgas obreras y paros cívicos, 1958-1974**

AÑOS	Huelgas	Paros cívicos	TOTAL Protestas
1958	15	10	46
1959	50	3	133
1960	44	5	94
1961	46	8	119
1962	47	11	116
1963	76	10	149
1964	87	7	163
1965	93	14	164
1966	114	4	198
1967	70	4	135
1968	45	3	119
1969	58	8	212
1970	65	9	177
1971	46	15	539
1972	76	12	196
1973	57	10	176
1974	93	18	295
<b>Total</b>	<b>1082</b>	<b>151</b>	<b>3031</b>

Fuente: Bases de datos de Mauricio Archila para paros cívicos y Alvaro Delgado para huelgas.

En contra de lo que se pensó en los primeros trabajos sobre las luchas cívicas, no encontramos mucha relación en las trayectorias de huelgas y paros cívicos<sup>43</sup>. Estos últimos muestran picos en 1958, parte del ciclo iniciado el año anterior que derribó la dictadura militar, 1962-65, y 1971-74. Alguna coincidencia se ve con los dos picos huelguísticos, pero el cuadro no permite ir muy lejos en esa relación y más bien indica trayectorias diferentes.

#### *Movimientos estudiantiles*

Tuvieron gran visibilidad y mostraron una rápida radicalización, tanto que fueron los que más desafíos hicieron al régimen bipartidista. El uso del plural es consistente con la diversidad de composición, intereses y aún generaciones. Sin embargo, saltan a la vista algunas características comunes: predominan los universitarios de las instituciones públicas aunque también hay participación de estudiantes de secundaria pública, en particular del Valle y la Costa, y de algunas privadas (las Universidades Santiago de Cali, Libre y de Medellín, fueron las más recurrentes). Algunas convocan gran solidaridad: en su orden la Nacional, Antioquia y Valle, UIS, Cartagena, Atlántico, Tolima, Nariño y Córdoba. Las últimas también provocan respaldo popular regional. Hubo verdaderos paros generales estudiantiles que de alguna forma sugieren una indudable proyección nacional -similar a la de ANUC en el 71 o a los 'paros' obreros del 65, 69 y 71. En los conflictos de 1970 y 1971 contaron incluso con apoyo de centros privados reticentes a la acción directa hasta ese momento: Universidades de los Andes, Javeriana, Eafit, Santo Tomás y La Salle.

Los dos ciclos más notorios de la agitación estudiantil, 1964-1966 y 1970-72, coinciden con un auge obrero, el primero, y campesino, el segundo. Pero no es clara la convergencia con otras luchas populares. El quinto motivo de movilización estudiantil es el apoyo a demandas populares, en particular contra el costo de vida y el alza de transporte<sup>44</sup>. Pero antes, los estudiantes esbozan otras demandas propias: presupuesto para sus entidades,

autoridades competentes, autonomía (en especial en torno a la composición de los órganos directivos), y solidaridad con otras protestas estudiantiles. Además, muchas luchas estudiantiles se dan en contravía de procesos de movilización popular como en 1970, cuando se oponen a las elecciones en las que la Anapo está ganando espacio político. En esto, la suerte de los movimientos estudiantiles corre muy cercana a la de la izquierda.

En términos de logros se podría decir que los movimientos estudiantiles contribuyeron a superar las penurias presupuestales de las universidades públicas, aunque, hasta cierto punto aún subsisten en el presente, preservaron una autonomía que en ciertos aspectos era obsoleta (en lo de la extraterritorialidad para cuestiones de orden público), y forzaron a planear reformas universitarias de fondo que consultaran la realidad nacional. También pusieron el dedo en la llaga en deficiencias académicas e incapacidades docentes y administrativas. Pero aislaron a la universidad del país "nacional", no sólo del sector productivo, también del popular al menos en los sesenta; con los paros endémicos desmejoraron la calidad de la educación pública -en aras de defenderla-; limitaron los recursos financieros al expulsar a fundaciones privadas extranjeras y nacionales y atentaron contra la libertad de cátedra y la administración eficiente por el uso exagerado del veto a maestros y directivos por razones ideológicas o políticas<sup>43</sup>. El balance es difícil de determinar pues no es sencillo sopesar lo que se ganó y lo que se perdió. Más adelante volveremos sobre este punto.

#### Otros sectores

De hecho, los hemos mencionado en acápite anteriores, por lo que nos limitaremos a indicar los puntos centrales de ellos. Ya decíamos que los sectores empresariales son difíciles de distinguir de los designados como cívicos. En todo caso, salvo al sector de transportadores, en general a los empresarios -hasta nuestros días- les resulta antipático recurrir a la acción directa para presionar por sus intereses. Los transportadores adelantaron un número significativo de protestas, 107 en total. Ello refleja la dificultad de regular concertadamente la actividad en este sector.

Sobre las mujeres ya decíamos que su visibilidad es casi nula en el período estudiado. Cuando aparecen por lo común lo hacen como apéndices de los partidos políticos tradicionales. Escasamente figuran protestas de mujeres contra el costo de vida y la violencia y nada aún con relación a las reivindicaciones de género. Pero eso no quiere decir que las mujeres estuvieran ausentes de las protestas populares. Ellas, en realidad, constituían muchos de los rostros de las multitudes, solo que no eran visibles en su dimensión, nada despreciable sabemos hoy, de género.

Por último, los indígenas, en particular del Cauca, tienen una creciente visibilidad desde los setenta, aunque aún muy atada a la identidad campesina. Nos llamó la atención, a pesar de la poca información que encontramos sobre estos conflictos, su persistencia en la lucha por recuperar resguardos. Invadían las tierras que reclamaban suyas, algunas en manos del

42 *La Ciudad en la sombra...* Hubo, sin embargo, invasiones dramáticas en pleno centro de la ciudad como la del Policarpa que fue por oleadas y estuvo acompañada de una fuerte represión. Su orientación política fue adelantada por el Partido Comunista.

43 Desde el seminal artículo de Medófilo Medina ("*Los paros cívicos...*", págs 9-13) se buscaba ver no sólo la comparación entre los paros cívicos y la principal expresión de la 'lucha de masas', la huelga, sino la relación entre los movimientos populares y los obreros bajo el supuesto de vanguardia de estos últimos. Tanto Medina como Jaime Carrillo (*Los paros cívicos en Colombia*. Bogotá, Oveja Negra, 1981) señalan correlación entre ambas formas de protesta, lo que difiere de nuestra conclusión. El paradigma leninista que estaba por detrás de sus lecturas tal vez los hizo ver una mayor presencia obrera en las luchas cívicas de lo que en realidad ocurrió.

44 En entrevista realizada en diciembre de 1996, Jaime Caycedo afirmó que en los setentas el movimiento estudiantil buscó ligarse a los sectores populares con más éxito, lo que a sus ojos se reflejó en la agitación de esos años. Estos sectores, sin embargo, no siempre acompañaron a los estudiantes, en especial cuando estos se lanzaban a la agitación antielectoral.

45 Ivon Le Bot (*Educación e ideología en Colombia*. Bogotá: La Carreta, 1985) insiste, equivocadamente a nuestros ojos, en identificar los recursos financieros de cada universidad con autonomía, por lo que termina diciendo que los estudiantes la limitaron en aras de consolidarla.

clero, eran desalojados y a los pocos días volvían a invadir y a ser desalojados, y así hasta que finalmente lograban solución a sus demandas. Tal vez a esa tozudez se deba a que los indígenas fueron de los pocos que lograron reales recuperaciones de tierras en esos años: 5.000 hectáreas de buena calidad<sup>46</sup>.

### Expresiones regionales:

Hasta ahora hemos considerado las tendencias de las protestas sociales entre 1958 y 1974 en el plano nacional, pero es evidente que ellas esconden dinámicas diferentes del conflicto según los diversos

contextos regionales. Por eso, hemos elaborado tres cuadros que resumen esas tendencias, distinguiendo el fenómeno huelguístico del resto de las protestas. La separación de las huelgas responde a la particular trayectoria que muestran en el plano regional<sup>47</sup>.

Para la elaboración del cuadro 4 usamos una agrupación arbitraria, privilegiando cierta cercanía geográfica y alguna comunidad cultural. Ubicamos siete regiones a saber: la Costa Atlántica, que agrupa a los departamentos convencionalmente identificados como costeños (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre) más San Andrés; zona cafetera (Antioquia y antiguo Caldas); centro-

**CUADRO 4**  
**PROTESTAS SOCIALES, SIN HUELGAS, POR REGIONES, 1958-1974**

AÑOS	Costa Atlant.	Cafetera	Centro Orient	Costa Pacif.	Sur Orient	Santan- deres	Llanos Amaz.	Varios Deptos	EI PAIS	Total
1958	4	9	10	2	4	1	-	1	-	31
1959	21	8	21	14	5	4	2	-	8	83
1960	16	7	11	7	3	3	1	-	2	50
1961	16	5	16	18	13	2	-	1	2	73
1962	15	8	13	16	8	6	-	-	3	69
1963	19	13	13	14	1	4	-	1	8	73
1964	16	7	19	17	3	6	1	-	7	76
1965	25	3	16	13	4	3	-	-	7	71
1966	35	10	17	11	3	3	-	-	5	84
1967	24	7	13	15	2	4	-	-	-	65
1968	15	6	18	18	4	6	1	1	5	74
1969	39	28	22	28	15	11	7	1	3	154
1970	23	16	25	23	17	3	3	-	2	112
1971	229	42	50	54	75	14	11	5	13	493
1972	37	11	23	17	15	5	4	-	8	120
1973	31	14	20	26	6	11	4	-	7	119
1974	88	27	33	26	11	2	7	-	8	202
Total	653	221	340	319	189	88	41	10	88	1949

Fuente: Base de datos del autor (Anexo)



oriente o Cundinamarca (que incluye Bogotá) y Boyacá; Costa Pacífica o los departamentos que tienen salida al Pacífico (Chocó, Valle, Cauca y Nariño); sur-oriente el Tolima grande (incluido Huila); los Santanderes; y la Amazonia y Orinoquia o los llamados territorios nacionales (salvo San Andrés). En el cuadro incluimos aparte los conflictos que tocaron varios departamentos, distintos a los del área geográfica delimitada, y los de carácter nacional, estos últimos con una cifra respetable.

Lo primero que salta a la vista es la trayectoria más o menos similar de las regiones, a pesar de las diferentes escalas de sus cifras. Al contrario de la disparidad en las trayectorias por sectores, los conflictos regionales crecen o disminuyen en forma similar, dentro de su propia magnitud. Sin contar las huelgas, se perciben los crecimientos proporcionales en años como 1969, 1971 -momento de mayor agitación en todas las regiones- y 1974. Esto hablaría en favor de tendencias en los conflictos que, contando con las características regionales, están marcadas por elementos de carácter nacional que las trascienden.

El mayor número de conflictos lo concentra la región costeña con el 33.5% de los registros contabilizados. El peso de la protesta se acrecienta en esta región si consideramos su población, que, según los censos del 64 y 73, oscilaba entre el 18.7% y el 20.3% del total nacional<sup>48</sup>. En segunda instancia viene la región cundiboyacense que alberga a Bogotá, y tal vez por eso demuestre alto nivel de protesta (17% del total). De sobra se sabe que es la zona más poblada del país (con un índice cercano al 22% en los dos censos de la época), lo que matiza su combatividad. En tercer lugar en número de conflictos, viene la zona que hemos designado Pacífica, que encierra diferentes economías y niveles de desarrollo (algo va del Chocó al Valle). Estos cuatro departamentos cargaron con algo menos del 16% de los conflictos en un territorio que albergaba casi un 17% de la población del país en esos años.

La zona cafetera viene enseguida con un 11% de los conflictos. Aunque el número no es despreciable, contrasta con el alto porcentaje de concentración poblacional, cercano también al 22%. Algo

46 CRIC, Diez años de lucha: Historia y documentos. Bogotá: GINEP (*Controversia* No. 91-92), 1981, pág. 23

47 Para el movimiento huelguístico nos apoyamos de nuevo en Alvaro Delgado, quien realizó una investigación, aún sin publicar, para Planeación Nacional cubriendo 35 años, de 1960 a 1995 ("Conflicto laboral y región en Colombia", inédito, 1996).

48 Las cifras demográficas de esta sección provienen de José Olinto Rueda, "Historia de la población en Colombia, 1880-2000" en Alvaro Tirado Mejía (Ed.), *Nueva Historia de Colombia*, Vol. V. Bogotá: Planeta, 1989, págs. 368-369.

**CUADRO 5**  
**PROTESTAS SIN HUELGAS,**  
**EN LOS CUATRO GRANDES DEPARTAMENTOS Y SUS CAPITALES,**  
**1958-1974\***

AÑOS	C/marca	Bogotá	Valle	Cali	Antioquia	Medellin	Atlántico	Barr/quilla	TOTAL Nación
1958	9	4	2	-	5	3	1	1	31
1959	20	11	6	4	5	4	7	4	83
1960	9	8	3	-	2	2	9	9	50
1961	14	10	8	6	2	2	10	6	73
1962	11	9	10	3	3	2	3	3	69
1963	12	7	12	2	7	5	3	2	73
1964	18	15	12	2	3	2	5	4	76
1965	14	7	7	5	1	-	11	6	71
1966	15	8	9	2	2	2	16	7	84
1967	13	5	8	3	1	-	7	5	65
1968	15	11	11	5	3	1	4	3	74
1969	14	12	12	7	17	7	7	2	154
1970	18	14	7	3	11	4	7	6	112
1971	44	12	20	7	26	3	10	5	493
1972	20	17	11	4	5	5	7	5	120
1973	19	16	9	2	9	5	2	1	119
1974	29	25	12	7	18	9	26	21	202
TOTAL	294	191	159	62	120	56	135	90	1949

\* Excluye protestas de cobertura nacional.

Fuente: Base de datos del autor (Anexo)

similar ocurre con los Santanderes los cuales contando con algo más del 8% de la población, sólo muestran un 4.5% de los conflictos. Esto sugeriría que estas regiones, consideradas como de las más desarrolladas, no son las más conflictivas, reforzando la explicación de los conflictos sobre la desigualdad de desarrollo regional<sup>49</sup>. En ayuda de esta hipótesis acude la participación fuerte en conflictos de una zona no propiamente modelo de desarrollo en esos años: el sur oriente. Allí vivía algo más del 6% de la población que adelantó casi el 10% de las protestas de esos años.

La región que hemos llamado Orinoquia y Amazonia, casi la mitad del territorio con profundas diferencias internas, sólo tiene visibilidad en nuestros términos desde el 69 en adelante. La movilización social es proporcional a su escasa población, casi el 2% en ambos casos.

Como usamos una agrupación un poco agregada de regiones, ocultando desniveles en sus desarrollos, y ante la magnitud de una revisión de departamento por departamento, escogimos los cuatro más industrializados con sus respectivas capitales. De esta forma podemos vislumbrar con más

cuidado la dinámica de los conflictos en contraste con áreas con mayor homogeneidad desde el punto de vista económico.

La observación del cuadro 5 da algunas luces sobre las dinámicas regionales del conflicto social durante el Frente Nacional. Los cuatro departamentos considerados adelantaron 708 protestas, sin incluir huelgas, las que equivalen a más de una tercera parte o el 36% del total. Mirando sólo a las cuatro capitales la proporción disminuye al 20% de los conflictos. Esta última relación no sorprende si tenemos en cuenta que excluimos las huelgas, generalmente urbanas, e incluimos los conflictos campesinos (el 19% del total de todos los conflictos estudiados) y muchos cívicos que tuvieron lugar en áreas rurales.

Cundinamarca es el departamento que más concentra conflictos (15%) y en Bogotá ocurre lo mismo en términos de ciudades. Claro que no contamos las 88 protestas nacionales que seguramente tuvieron a la capital como epicentro o como una de sus principales sedes. El segundo departamento en adelantar acciones de protesta fue el Valle aunque se nota un pequeño declive en su participación hacia el final del período estudiado para dar paso a la creciente presencia de Antioquia. De hecho, el Valle fue una de las zonas de mayor agitación a fines de la dictadura -allí el movimiento contra Rojas fue el más masivo de todo el país- y en los inicios del Frente Nacional. En ello desempeñó un papel el rápido crecimiento azucarero y los conflictos sociales que generó la expansión capitalista. Esos factores de tensión tienden a disminuir hacia el final del Frente Nacional, en parte por el freno a la expansión azucarera. En cualquier caso, no se nota

que esos ciclos hayan impactado mucho a Cali en esos años pues mostró bajos índices de conflicto. Más bien el conflicto fue distribuido en las diversas ciudades y áreas rurales del Valle. De hecho Barranquilla superó con creces a Cali y Medellín, concentrando dos terceras partes de las protestas de su departamento.

La observación de la dinámica de las protestas, sin huelgas, en estos departamentos muestra que, aunque tuvieron conflictos, fueron zonas con menor tensión social explícita si se considera su población (casi el 46% del total en 1973) y su peso económico<sup>50</sup>. Ello llevaría a pensar de nuevo en una correlación negativa entre desarrollo y protesta. Las cosas, sin embargo, no son tan sencillas. Veamos el conflicto huelguístico (cuadro 6), que presenta precisamente el otro lado de la moneda.

El cuadro 6 señala que los cuatro departamentos adelantaron 564 huelgas (el 52%) durante el Frente Nacional. Lo anterior, sin incluir los paros de cobertura nacional -que fueron el 15% del total para el período 1961-1995-<sup>51</sup> los cuales con seguridad tuvieron lugar en estas áreas. Las cuatro capitales, a las que les restamos los conflictos no sólo nacionales sino aquellos compartidos con otras ciudades de su Departamento, adelantaron 345 huelgas (el 32% del total). El alto porcentaje de conflictos laborales en estos cuatro departamentos es consistente no sólo con el desarrollo económico de estas zonas, sino con su mayor índice de organización. En 1974 ellos concentraban el 51% de los sindicatos del país<sup>52</sup>.

La comparación interna de las cuatro áreas y sus capitales es similar a la del cuadro anterior. Valle es la más conflictiva en términos huelguísticos,

49 Hipótesis propuesta por Pedro Santana para explicar las luchas cívicas en Desarrollo regional y paros cívicos en Colombia. (*Controversia* Nos. 106-107). Bogotá: Cinep, 1983.

50 Según Planeación Nacional, esos cuatro Departamentos, en los censos del 64 y 73, concentraban entre el 38% y el 45% de la PEA del país. Esos mismos departamentos más Bolívar aportaban más de tres cuartas partes del valor agregado industrial en esos años, e incluso crecieron en su participación: del 77% en 1960 al 79% en 1974 ("La economía colombiana, 1950-1975", *Revista de Planeación y Desarrollo*, Vol IX, No. 3, oct-dic, 1977, págs. 31 y 225).

51 Cálculos de Alvaro Delgado ("Conflicto laboral...", pág. 30).

52 Jaime Tenjo, "Aspectos cuantitativos del movimiento sindical colombiano", *Cuadernos Colombianos*, No. 5, 1975, pág. 17. En 1984 seguían contando con el 53% de los sindicatos y el 60% de los sindicalizados (A. Delgado, "Conflicto laboral...", pág. 21).

pero Bogotá sigue siendo la ciudad más combativa. Cundinamarca es el segundo departamento y Barranquilla la segunda ciudad en índices de conflictos. La diferencia con el cuadro 5 está en el peso de estas zonas con relación al total del conflicto huelguístico. De un papel no muy notorio en los conflictos sin huelgas, pasamos a una gran proporción del movimiento huelguístico. No debemos olvidar que las huelgas son algo más que una tercera parte del conjunto de protestas sociales del Frente Nacional. Por eso, nuestras apreciaciones anteriores se

ven cuestionadas: es precisamente el desarrollo económico el que da piso a la conflictividad laboral. Por tratarse de un tipo más urbano, y si se quiere más moderno, de conflicto social, que contrasta con otros de raigambre más tradicional y rural, debemos recurrir a hipótesis diferenciadas sobre la relación desarrollo y protesta social.

Es posible que el desarrollo desigual explique ciertos conflictos rurales y regionales. En el caso campesino, la escasez de tierras y la existencia de territorios baldíos pudo ser motor de invasiones y

**CUADRO 6**  
**HUELGAS LABORALES EN LOS CUATRO GRANDES DEPARTAMENTOS**  
**Y SUS CAPITALES, 1958-1974\***

AÑOS	C/marca	Bogotá	Valle	Calí	Antioquia	Medellín	Atlántico	Bar/quilla	TOTAL Nación
1958	4	3	6	3	3	2	-	-	15
1959	6	5	14	5	7	4	4	4	50
1960	5	4	8	3	6	5	5	5	44
1961	6	6	12	2	11	6	2	2	46
1962	8	5	8	4	6	2	3	2	47
1963	7	4	11	6	9	2	6	6	76
1964	11	8	15	8	7	1	4	3	87
1965	13	8	15	8	8	5	11	9	93
1966	19	17	18	5	13	12	12	10	114
1967	10	6	10	3	10	3	4	4	70
1968	9	8	8	2	7	6	3	1	45
1969	5	5	7	1	5	3	6	6	58
1970	14	12	5	2	12	7	2	2	65
1971	6	4	4	-	8	4	5	4	46
1972	8	6	10	6	2	2	14	13	76
1973	13	7	5	3	6	4	4	3	57
1974	20	12	15	3	13	10	11	9	93
Total	164	120	171	64	133	78	96	83	1082

\* Excluye huelgas de cobertura nacional y las que involucran a otras ciudades diferentes de las capitales del respectivo departamento incluso las de su área metropolitana.

Fuente: Base de datos de Alvaro Delgado.

agitación agraria. En algunas luchas cívicas la precariedad de servicios públicos y las necesidades de desarrollo local y regional fueron las causas de agitación<sup>53</sup>. Pero también cabe la otra posibilidad expresada con claridad por José A. Ocampo: el conflicto social se produciría por la aparición de nuevas fuentes de riqueza y sobre todo por el acceso diferenciado a ellas. Por tanto donde no haya desarrollo reciente no se presentarían muchos conflictos<sup>54</sup>. Esto es más evidente en el contexto de las luchas laborales y las protestas empresariales.

Desde un ángulo diferente, la dinámica de otros movimientos como el estudiantil y el de mujeres, responde a lógicas no necesariamente ligadas con un mayor o menor desarrollo económico, punto que profundizaremos en la sección que sigue a continuación. Baste por ahora recalcar la inutilidad de buscar explicaciones unicasuales de los conflictos sociales. Se impone la construcción de hipótesis complejas y multivariadas que se pongan a prueba en casos concretos<sup>55</sup>.



## ANÁLISIS DE LAS PROTESTAS SOCIALES

Para facilitar esta sección, hemos agrupado las grandes tendencias que enseñan las protestas sociales a lo largo del Frente Nacional (1958-1974) en cinco partes: 1) las motivaciones de esas protestas; 2) su relación con el resto de la sociedad civil; 3) la interacción con los partidos políticos; 4) la relación

con el Estado; y 5) a modo de síntesis, los cambios en las identidades colectivas. En cada parte se intenta tomar ejemplos de uno de los sectores más visibles.

### ¿Por qué la gente se moviliza?

Hay varias tendencias relacionadas con la evolución de los movimientos mismos que surgen de nuestra lectura sobre las protestas sociales y permiten responder en forma tentativa a esa pregunta. Las enumeramos a continuación. La primera, es que no existe una dinámica homogénea de las protestas sociales por parte de los sectores que las adelantan. No hay indicios para pensar en la presencia de un elemento cohesionador de las distintas expresiones de conflictos sociales en nuestra sociedad. En ese sentido no comulgamos con el supuesto ideológico y político sobre la existencia de un 'campo popular' que en forma unificada y homogénea adelante una lucha contra un enemigo común. Ni siquiera hay evidencia clara de que hubiera un tal enemigo común pues cada sector tuvo conflictos con diversos antagonistas, aunque sobresaliera el Estado en sus diversas instancias.

Las cifras de nuestro banco de datos de protestas no permiten hablar de claras convergencias entre las luchas sociales, salvo en algunos momentos como el inicio de 1971, cuando repuntaron las protestas campesinas y estudiantiles, algo las cívicas y en menor instancia las laborales con el paro general de marzo. Los años pico de actividad de un sector difieren de los de otros, con la excepción tal vez del 69 (cívicos y estudiantes), del 71 (campesinos y estudiantes) y del 74 (cívicos, empresarios y algo campesinos). De todas formas estos tres fueron los años más combativos del período estudiado. Las trayectorias divergentes ya las ilustrábamos en la compa-

53 Esto fue sugerido por Pedro Santana, *Desarrollo regional...* pág. 16

54 Intervención en un foro sobre Antioquia, 1982, citado por A. Delgado, "Conflicto laboral...", pág. 12

55 En esto seguimos el tipo de análisis que hace Clara Inés García de la dinámica de conflictos cívicos en las cuatro subregiones antioqueñas analizadas por ella (*Movimientos cívicos y regiones*, Informe de investigación, Iner, 1995). En forma similar se podría proceder con las hipótesis sobre la relación entre ausencia del Estado y protesta cívica. Puede funcionar en algunos conflictos, pero en otros, como lo ilustra la misma Clara Inés García para el suroriente antioqueño, fue la presencia del Estado por medio de megaproyectos energéticos la que desató la movilización ciudadana.



ración entre huelgas y paros cívicos (cuadro 3). Contrastábamos también estas tendencias con el comportamiento de las regiones, que en diferente escala se mueven más o menos paralelamente en los mismos ciclos (cuadro 4).

Hay muchas explicaciones para la diversidad de ritmos sectoriales, incluso de orden metodológico por la forma como se construyó la base de datos, que no ocultan el hecho de que no hay evidencias cuantitativas de alianzas permanentes entre los diversos actores. Cada uno parecería ir por su lado con una lógica propia a su ritmo e intereses.

Pero podemos ir un poco más lejos; no sólo no hubo convergencias en las luchas, sino que se presentaron serios desencuentros entre los distintos sectores a pesar de la retórica de la alianza obrero-campesina y popular. Un caso palpable fue el poco respaldo que las centrales sindicales dieron al movimiento campesino de los setentas -la UTC y la CTC

adujeron que éste era comunista, y la CSTC y algunos no confederados que era controlado por un sector de la izquierda distinto al de su dirección-. Esto para no hablar del dramático desencuentro entre ciertos movimientos más radicalizados, el estudiantil por ejemplo, y los sectores populares que votaron por la Anapo.

Lo anterior, que coloca una sospecha sobre las ideas de unidad popular, no impide el reconocimiento de coincidencias generales en ciertas coyunturas (amenaza de paro obrero del 65 y 69; o paro laboral del 71 precedido de luchas nacionales de sectores estudiantiles y campesinos; movilización cívica y campesina en el 74)<sup>56</sup>. Esta es nuestra segunda preocupación. Si se mira con mayor cuidado esas pocas coincidencias temporales se percibe que son fruto más de condiciones externas que de una su-

puesta dinámica cohesionadora de las luchas sociales. De esta forma, cambios económicos sensibles como alzas de combustibles y de transportes provocan amplias reacciones populares. La dinámica política del Frente Nacional desempeña también un papel explicativo, si no el mayor, en el comportamiento de las luchas. Así se vislumbra en el inicio del gobierno de Pastrana, cuestionado por el virtual triunfo de la Anapo. Sin negar los motivos específicos que produjeron el auge de 1971 -presión por reforma agraria en el caso campesino, lucha por la reforma universitaria para los estudiantes o alto costo de vida para obreros y el pueblo en general-, el contexto político juega un especial papel en abrir mayor o menor espacio para la protesta.

Otra cosa es la existencia de demandas que atraviesan en forma horizontal a los diversos movimientos y que eventualmente desembocan en protestas simultáneas. Las alzas de combustibles o de

productos básicos unificó algunas veces a distintos sectores. La presencia de agentes violentos (estatales generalmente) provocó pocas, pero dicientes protestas que clamaban por la paz -7 en todo el período, 4 de ellas en 1958. Pero estas coincidencias horizontales fueron más comunes en los ámbitos locales y regionales, que en el nacional como lo demuestra la dinámica de las luchas cívicas y algo las campesinas. Un caso notorio que podemos traer a colación es el ocurrido en Manatí, Atlántico, a principios de los sesenta. En el conflicto por la ocupación de unos playones baldíos, los campesinos agrupados en el Sindicato de Agricultores contaron con respaldo de la población del municipio, el clero local y los jesuitas asesores de la UTC, los sindicatos afiliados a esta central en el Atlántico y políticos regionales y hasta nacionales como Carlos Lleras quien se solidarizó denunciando que en la Costa había campesinos muy pobres, pervivencias casi feudales y que las autoridades eran proclives a los poderosos. Tras ardua lucha, y no pocos sinsabores aún de los sacerdotes que los acompañaron, el Incora intentó dar solución por medio del proyecto Atlántico Tres<sup>57</sup>. Como este caso sucedieron muchos en torno a problemas específicos de los municipios, especialmente en los llamados movimientos cívicos, aunque no siempre contaron con tan amplia solidaridad.

A pesar del énfasis local de las luchas populares, existen también elementos globales que marcan los imaginarios de los movimientos sociales en esos años. Esta es nuestra tercera consideración. Lo más notorio fue el contexto de "Guerra Fría" que se respiraba en el plano internacional y que alimentaría la lectura distorsionada de los conflictos sociales acrecentando una supuesta enemistad enmarcada en la polaridad capitalismo-comunismo, punto que desarrollaremos en la última sección. Pero el im-

pacto del contexto internacional no se reduce a los efectos de la Guerra Fría. Hay una transnacionalización creciente de organizaciones, formas de lucha y hasta de imaginarios de identidad. No es sólo la existencia de polos organizativos internacionales, los más claros los sindicales (ORIT o FMS), sino la divulgación cada vez más planetaria de luchas como la estudiantil conocida como Mayo del 68.

Nos encontramos, por tanto, en un complejo escenario en donde, si bien predominan los intereses locales y particulares, se insinúan tendencias globalizadoras que influyen también en las dinámicas internas de los movimientos sociales.

Nuestra cuarta inquietud gira en torno a lo que podríamos designar como un cambio de protagonismo de las protestas<sup>58</sup>. Hasta el 68, el movimiento laboral marcaba el ritmo de las luchas en el país y sus picos o bajones coincidían con la curva general (ver cuadro 2). A partir de ese año el protagonismo obrero se diluye y por breves momentos lo encarnan los sectores cívicos y estudiantiles (1969), o campesinos (1971). ¿Qué quiere decir esto? No se podría hablar de la pérdida de "vanguardia" obrera pues ello remitiría a un proyecto homogéneo sobre alianzas estables liderado por un abstracto proletariado que ya hemos descartado. La explicación puede ser más práctica: el movimiento laboral, seguramente por su tradición organizativa y de lucha, fue el que más rápido aprovechó el regreso a la democracia que representó el Frente Nacional. Pero con el tiempo, otros sectores se lanzaron a las calles y veredas a protestar por sus intereses; algunos de ellos con una rápida radicalización, propiciada, entre otros factores, por la estrechez del pacto bipartidista. Entonces, no sólo constatamos un pluralismo en el liderazgo de las luchas, sino grados diferentes en los desafíos que éstas colocaron al régimen imperante.

56 En los paros laborales no todos los sectores se hicieron presentes pues no faltó la acusación, proveniente de la izquierda radical, de ser paros 'patronales' o 'reformistas' porque fueron convocados por las centrales tradicionales o por la CSTC orientada por el PCC.

57 (Revista) *Tierra*, No. 40, abril-junio de 1967, págs 8-51.

58 El juego cuantitativo tiene sus límites pues las cifras esconden profundas diferencias entre un paro estudiantil y uno obrero, o entre una manifestación y un paro cívico. A pesar de que las dimensiones de las protestas (por sectores y tipos) no son idénticas se pueden utilizar las cifras como una aproximación, burda, a esas dinámicas. Lo que está en discusión es la CALIDAD de la ACCION que incluye cobertura, número de involucrados, duración e impacto, cifras de difícil consecución con excepción del sector obrero.

El quinto punto que queremos abordar se relaciona con las lógicas de la acción colectiva y su proyección hacia la sociedad mayor y el Estado. Nos centraremos en el caso obrero para ilustrar mejor nuestras hipótesis. La apreciación común entre los analistas del período es que las protestas y los movimientos que ellas reflejan, en la medida en que no pusieron un desafío serio al Frente Nacional, versaron más sobre demandas inmediatas y materiales -economicistas se les suele designar en el caso obrero- que propiamente políticas o culturales<sup>60</sup>. En una reproducción clara del paradigma leninista se suelen oponer luchas económicas y políticas como si las primeras fueran más atrasadas o de menor categoría que las segundas. Nosotros, por el contrario, creemos que esa dicotomía no ayuda a explicar las dinámicas de la lucha social. Es cierto que predominaron esos motivos inmediatos y materiales, pero aún en ellos había gérmenes de roce político<sup>61</sup>.

Un camino para explorar estas hipótesis es mirar la dinámica de las luchas laborales, en especial de la huelga. Elementos como la disminución de los paros "políticos" y de solidaridad en los últimos treinta años de lucha, así como una mirada general sobre las demandas, lleva a Alvaro Delgado a afirmar que "los trabajadores colombianos van al cese de labores casi exclusivamente por motivos económicos"<sup>61</sup>. Pero los mismos datos pueden dar pie a otra lectura. Tomando la columna de huelgas del cuadro 3, que es la misma construida por Delgado, vemos un ascenso en su número entre 1958 y 1959 para seguir parejo hasta 1962, a partir de allí hasta 1966 un ascenso pronunciado, luego una disminución hasta 1971 para un nuevo repunte en los tres últimos años estudiados. La variable política viene de inmediato a la mente. El argumento va más allá de una burda identificación entre la agitación laboral y el color político del presidente, máxime en un período de coalición bipartidista. De hecho, lo que está en juego es el tipo de propuestas gubernamentales y su desarrollo práctico, más que el partido del jefe del gobierno<sup>62</sup>.

Para llegar a conclusiones más sólidas deberíamos comparar la trayectoria de las protestas laborales con la evolución de las demandas materiales más

sensibles para el mundo obrero como el empleo o el salario. Sobre el empleo no pudimos disponer de muchas estadísticas para esos años, a pesar de que la estabilidad laboral figura como una de las principales razones de la movilización obrera. En un análisis del politólogo Hernando Gómez Buendía para las cuatro grandes ciudades entre 1963 y 1974 se nota un descenso de la tasa de desempleo abierto entre 1963 y 1965. A partir de ahí sube hasta el punto más alto en el Frente Nacional, entre el 13 y el 15% en 1967-68, para luego bajar lentamente hasta 1973, entre 8.5 y 10.5%, y subir al 12% en el 74<sup>63</sup>. Aunque a grandes rasgos la trayectoria del desempleo coincide con los grandes ciclos huelguístico, una mirada más cuidadosa muestra cierta disparidad pues en un año de altos índices de desempleo como 1968, las huelgas llegaron a su punto más bajo desde 1958, sólo 45 en total. Con el empleo es difícil establecer la causalidad del conflicto pues altos indicadores de desocupación pueden presionar el conflicto, pero a su vez la posibilidad de perder el empleo en un momento de esos puede atemorizar a los trabajadores para ir a la huelga. Esto último es lo que piensa Fernando Urrea para quien las tendencias restrictivas del empleo en la economía colombiana disminuyen la movilización laboral<sup>64</sup>. Por tanto, el impacto de esta variable en la acción obrera no puede ser mirada en una dirección.

El salario, que figura como la principal motivación en la movilización laboral, puede permitirnos conclusiones más firmes. La evolución del salario real según, las distintas fuentes consultadas para un trabajo académico del autor, mostraría una tendencia al aumento hasta el 70, momento en el que para sectores como industria manufacturera y construcción se iniciaría un marcado descenso, no así para otros como gobierno y agricultura<sup>65</sup>. Las estadísticas sobre el salario mínimo legal muestran una trayectoria de aumento en los sesentas: en 1962 llegó a subir en 48 puntos sobre la base de medición que fue 1956 y en 1963 se duplicó con 114 puntos por encima del año base. En 1969 había bajado a casi al nivel del 56, todo en términos reales, para subir tenuemente en 1974<sup>66</sup>. Es una trayectoria similar al salario real industrial. Mirada así la evolución sala-

rial, poco nos explica los ciclos de auge y declive huelguísticos de los sesenta, tal vez más los de los setenta cuando el salario real marca algún descenso. Es muy posible que los trabajadores se muevan menos por una categoría abstracta como salario real -de hecho es una construcción estadística-, que por variables percibidas más fácilmente como los cambios en el costo de vida.

El movimiento del índice de precios al consumidor, tanto para obreros como empleados en los años estudiados, muestra pequeños incrementos de 6 o 7% anual hasta 1963, año en el cual la inflación osciló entre el 30 y 35%, para bajar de nuevo en el 64 a un 8 o 9%, y volver a subir al 14% en 1965 y un 13% en el año siguiente. El período de Lleras Restrepo fue de control inflacionario con índices entre 6 y 8%. El de Pastrana marcaría el retorno de inflaciones del 12 y 14% en 1971 y 1972 o más dramáticas del 22 y 26% en los dos últimos años<sup>67</sup>. Aquí sí se encuentra una variable que muestra impacto más directo en la agitación obrera. Los momentos álgidos inflacionarios parecen coincidir con auges huelguísticos. Pero esta aparente correlación debe ser mirada con más cuidado pues no debe olvidarse que muchas de estas

variables (tasas de desempleo, inflación, salario real) pueden tener un efecto retardado en la medida en que sus indicadores se consolidan con posterioridad a lo ocurrido, así algunas se perciban en el transcurrir cotidiano. Otro es el problema inverso: el efecto de la acción obrera sobre ellas.

En un ejercicio académico realizado hace varios años intentamos mirar la relación entre salarios y sindicatos y aunque el resultado estadístico no fue contundente, se pudo constatar que, para 1970, año de la medición, la acción sindical explicaba más las modificaciones sobre las prestaciones que sobre el salario directo. Más significativo fue el otro hallazgo: las variables que llamábamos extra sindicales -que sufren el impacto de las políticas macroeconómicas- como posición de la empresa en el mercado, grado de concentración o de calificación de la mano de obra, terminaron siendo más explicativas de los cambios salariales que las variables propiamente sindicales<sup>68</sup>. Estas constataciones estadísticas, cuestionan la 'utilidad' del sindicalismo o de la huelga en la consecución inmediata de demandas sentidas y ratifican la hipótesis de la debilidad del movimiento laboral, el de más visibilidad y protagonismo en esos años<sup>69</sup>.

59 Fue una lectura común en las historias del sindicalismo desde el marxismo. Alvaro Delgado es tal vez quien más clara y convincentemente plantea esta hipótesis en épocas recientes (*¿Dónde está...?*, págs. 66-73). Daniel Pecaút prefiere hablar de una lógica 'liberal' de negociación que predominaría sobre otra más 'política' o una incipiente de 'representación social' desde mediados de los cuarenta hasta los sesenta (*Política y sindicalismo en Colombia*. Medellín: La Carreta, 1973, último capítulo).

60 Víctor M. Moncayo y Fernando Rojas, distanciándose del paradigma leninista, preferían hablar de lucha REIVINDICATIVA que articulaba la económica y la política (*Las luchas obreras y el derecho laboral en Colombia*. Medellín: La Carreta, 1978).

61 *¿Dónde está...?* pág. 72.

62 Aunque Ana María Bejarano y Renata Segura llaman la atención sobre los intentos modernizadores de los dos Lleras ("El fortalecimiento selectivo del Estado durante el Frente Nacional", *Controversia*, No. 169, noviembre de 1996), que coinciden con períodos de menor agitación social.

63 Citado por el estudio del DPN, "La economía colombiana...", pág. 68. Gómez habla de límites inferior y superior en los promedios de tasas de desempleo abierto en las cuatro ciudades.

64 Citado por A. Delgado, "Conflicto laboral...", pág. 59.

65 "Los sindicatos y la sociedad moderna: el caso colombiano", Tesis de Maestría en Economía y Recursos Humanos, Universidad Javeriana, 1981, págs. 180-197. Estas tendencias son confirmadas por diversos estudios tales como el de José A. Ocampo y Nora Rey, "La recesión de 1981 y la situación laboral", *Cuadernos de Estudios Laborales del CEDE*, No. 3, mayo de 1981 y del DPN, "La remuneración real en la década de los setenta", *Revista de Planeación y Desarrollo*, Vol. XVI, No. 1, enero-marzo de 1984.

66 DNP, "La economía...", pág. 67.

67 Estadísticas del DANE tomadas del libro *Colombia económica*. Bogotá: Contextos editores, sin fecha, pág. 492.

68 "Los sindicatos y la sociedad moderna..." especialmente el capítulo tercero en donde hicimos un ejercicio econométrico, para un año, sobre el impacto sindical.

69 El mismo Delgado refuerza esta hipótesis al constatar que entre 1965 y 1974, "cuando ocurre el mayor desarrollo de los últimos cuatro decenios, se presentó el menor número de huelgas en 35 años" ("Conflicto laboral...", pág. 5).

Pero también sugieren que la acción obrera va más allá de las meras variables económicas inmediatas y por esa vía toca a la política<sup>70</sup>. Ello no significa que las demandas materiales no tengan algún papel en la trayectoria de las huelgas y que el ritmo inmediato de ellas no esté influido por las demandas económicas, por ejemplo la lucha contra la inflación. Nuestro acento crítico está colocado contra el determinismo economicista de la acción laboral y en general, de los diversos movimientos sociales. Algo similar concluimos del análisis regional de la protesta social durante el Frente Nacional: no siempre se puede recurrir a la explicación del 'desarrollo desigual regional'. La dinámica de las protestas responde, por tanto, a una interacción entre demandas materiales, contexto político y marco cultural en el cual se mueven los actores en cuestión, sin que pueda levantarse una única explicación. Aquellas dicotomías entre acción económica y política, aplicables tal vez a coyunturas concretas, deben ser revaluadas cuando se intentan explicaciones de más larga duración como la que intentamos realizar en estas páginas.

A pesar del señalamiento sobre la debilidad de los movimientos sociales durante el Frente Nacional, paradójicamente dicho período es considerado como la edad de oro de las organizaciones. Así introducimos nuestra sexta inquietud en relación con la dinámica interna de los movimientos sociales. La aparente madurez organizativa es más evidente para los movimientos campesino (ANUC) o estudiantil (FUN y consejos estudiantiles) que para el movimiento obrero, caracterizado por la proliferación de sindicatos y federaciones paralelos pero con la mayor tasa de sindicalización en su historia, el 16%<sup>71</sup>. La existencia de organizaciones con amplia cobertura que promovieron acciones de gran impacto nacional -huel-

gas estudiantiles de mediados de los sesenta, invasiones de tierra a principios de los setenta y paros laborales como el del 71- marca el imaginario dorado de los movimientos sociales en esos años. Tanto que cuando hoy se habla de crisis organizativas, el punto de comparación es el Frente Nacional. Pero aún esas poderosas organizaciones estudiantiles o campesinas tuvieron corta vida, en gran parte debido a la misma acción del Estado.

Como se sabe, a instancias oficiales se crearon las organizaciones campesinas y las acciones comunales que no hemos mencionado aún. La división de la CTC, propiciada por el gobierno de Lleras Camargo, dio origen a la CSTC y a parte del sindicalismo no confederado. El

anticomunismo de la CTC la llevó a expulsar en 1964 a los dirigentes 'duránistas' -llamados así por seguir las orientaciones de Augusto Durán, líder comunista hasta 1947- a pesar de que ellos había apoyado la expulsión de los comunistas en el 60<sup>72</sup>. La división sindical se tradujo también en la no fusión de la UTC y la CTC aunque se mencionó mucho por esos años<sup>73</sup>.



Algo similar ocurrió con la división de la ANUC al crearse un ala oficial dejando espacio para el ala 'independiente', que fue mayoritaria en los años setenta. La FUN, aunque creada por los estudiantes, tuvo vida mientras contó con el aval o la interlocución estatal. Por diversos motivos muchas de estas organizaciones -creadas desde arriba o surgidas desde abajo- perdieron su capacidad de convocatoria y hasta desaparecieron. Uno de esos motivos, si no el crucial, fue la respuesta estatal que combinó desde la supresión legal (caso de la FUN) hasta el desestímulo a las organizaciones independientes (no reconocimiento legal de confederaciones como la CSTC y la CGT) o la descarada división (CTC y ANUC). Pero no todas las

organizaciones sociales desaparecieron o se debilitaron, algunas mantuvieron dinamismo como el sindicalismo a pesar de su división y otras, pocas pero significativas, se fortalecieron como sucedió con la incipiente organización indígena. En el caso sindical la división, por arriba no fue obstáculo para que se adelantara la unidad de acción por la base impulsada con ahínco por el Partido Comunista y secundada por sectores como el de Tulio Cuevas en la UTC. Así se produjeron huelgas con dirección conjunta y los paros del 69 y del 71. El panorama organizativo, por tanto, aunque no fue negativo, distó de ser el ideal dorado que a veces se añora.

### Heterogeneidad de los movimientos sociales y de la sociedad civil

Si en la sección anterior insinuábamos la ausencia de una dinámica convergente de los movimientos sociales -lo que a su vez era una crítica a la supuesta existencia de un campo popular homogéneo- aunque reconociéramos coincidencias temporales y locales, en ésta tocaremos las tensiones y divergencias reales que se presentaron entre ellos.

Lo primero que debe quedar claro es que no suponemos que haya homogeneidad en el interior de cada movimiento. La heterogeneidad que encontramos en la sociedad civil se reproduce en pequeño

en los llamados movimientos sociales. Ya lo veíamos para el caso obrero en donde no sólo había dispersión organizativa sino diversidad de estratos socioeconómicos, para no recavar sobre las diferencias generacionales o de género. Todo ello rompe con la idea de un proletariado homogéneo.

En el caso campesino es más evidente y dramática la heterogeneidad interna. En la ANUC, por ejemplo, hizo presencia tal diversidad de sectores sociales que prácticamente ella abarcaba a casi todas las capas sociales existentes en el campo: desde el jornalero o el minifundista hasta el campesino acomodado o el mediano empresario rural. Aunque se proclamaba la organización de todos los pobres del campo, en realidad cubría también a sectores medios y hasta altos rurales. Esto para no hablar de las diferencias regionales de desarrollo agrario pues no es lo mismo la economía campesina minifundista de los altiplanos, la colonización de la frontera agrícola, o las zonas de latifundio ganadero tradicional y las de reciente crecimiento capitalista<sup>74</sup>. Estas diferencias tienen consecuencias incluso en el tipo de antagonista de las luchas, pues el colono chocará más con el Estado, mientras en las zonas de latifundio tradicional el roce principal será con el terrateniente y en las de reciente avance capitalista con el empresario. El minifundista con una lógica individual se enfrentará más con su vecino que con el Estado.

70 La cuantificación del impacto sindical -tema que rebasa nuestro objetivo en estas páginas- es complejo pues la sola organización puede tener efectos indirectos difíciles de medir, como por ejemplo, las concesiones patronales para impedir su acción. Miguel Urrutia aparentemente coincide en el privilegio de las variables políticas dada la debilidad sindical, pero su énfasis está en la relación que la organización debe tener con el Estado para fortalecerse (*Historia del movimiento sindical en Colombia*. Bogotá: Uniandes, 1969). En nuestro intento cuantitativo fue de mucha guía el ensayo de Jaime Tenjo ("Impacto de la actividad sindical sobre los salarios: un análisis econométrico", *Revista de Planeación y Desarrollo*, Vol. VII, No. 2, julio-diciembre de 1975, págs. 112-164), quien llegó a conclusiones similares aunque con más optimismo sobre el efecto sindical.

71 Rocio Londoño, "Una visión de las organizaciones populares en Colombia". Módulo de la escuela de liderazgo democrático. Bogotá: Corporación SOS, Viva la Ciudadanía, 1994, pág. 32

72 Ver el órgano del ejecutivo de la CTC, *Liberación Obrera*, No. 30, octubre-noviembre, 1964 págs. 1 y 5. Allí se menciona la expulsión de Carlos Bonilla, Hector Molina y Jorge Zabala, directivos de la FTC, federación de Cundinamarca. No fue una purga total de duranistas pues antiguos militantes de este sector como Andrés Barandica e Ismael Escamilla siguieron figurando en las filas de la CTC. No debe olvidarse que muchos dirigentes de las centrales tradicionales tuvieron simpatías comunistas en sus inicios, como fue el caso notorio de José Raquel Mercado.

73 A pesar de su cercanía ideológica y política -ambas eran anticomunistas y apoyaron al Frente Nacional-, y de la presión externa del sindicalismo pronorteamericano agrupado en la CIOLS, la fusión nunca se produjo posiblemente por no perder los privilegios burocráticos. Los grupos izquierda no se quedaron atrás al fragmentar aún más el sindicalismo en aras del control hegemónico de un sector.

74 León Zamora insiste en la heterogeneidad de la cuestión agraria derivada de las cuatro estructuras regionales señaladas (*Los usuarios campesinos...*, págs. 13-23).

Los anteriores señalamientos nos llevan cada vez más lejos del imaginario guerrillero con el que se quiso leer la protesta social en esos años. Es decir, como si hubiera dos ejércitos cohesionados que se enfrentaran en un campo de batalla claramente delimitado. No solo no existió un campo popular unitario y homogéneo, sino que los movimientos sociales distaban de ser batallones cohesionados a la manera militar con un enemigo común. Y como si fuera poco, no pocas veces chocaron entre ellos. Tal fue el caso de las tensiones entre campesinos e indígenas en los años setenta.

Desde su origen, en 1971, el CRIC recibió apoyo de la ANUC, tanto que a ésta la consideraba una organización hermana, pero menor de edad. Por medio de la Secretaría de Asuntos Indígenas, la ANUC se relacionaba con los brotes organizativos indígenas. La subordinación se justificaba por la primacía de la identidad campesina sobre la étnica: "los indígenas somos campesinos" rezaba una declaración oficial del CRIC en 1974<sup>75</sup>. Sin embargo, desde el principio los indígenas paeces y guambianos reclamaban cierta autonomía "en razón de las características específicas, sobre todo culturales que nos corresponden"<sup>76</sup>. Las tensiones aumentaron, adocenadas por los intereses políticos que estaban por detrás de las respectivas direcciones, para culminar con el retiro del CRIC de la organización campesina<sup>77</sup>. ¡Cuán caro era lograr la mutua autonomía! El ejemplo de los indígenas del Cauca sirvió para la creación de otros Consejos Regionales Indígenas con distancia de la ANUC, sin que entre ellos hubiera tampoco una fácil unidad. El mensaje de la existencia de roces por ausencia de una real autonomía entre los diversos actores sociales queda como una de las tantas lecciones del período estudiado.

Hay otros ejemplos de tensiones y desencuentros entre diversas organizaciones sociales, siendo las más notorias las estudiantiles con sectores populares agrupados en las acciones comunales, las asociaciones de viviendistas y muchos sindicatos en las ciudades, para no mencionar los choques entre las mismas JAC y las asociaciones de usuarios en el campo<sup>78</sup>.

De otra índole fueron los choques entre sectores populares y empresariales que recordábamos páginas atrás. Aquí sale clara la contradicción por intereses que puede ser leída como lucha de clases en sentido tradicional, aunque los bandos no sean tan fácilmente identificables como se suele creer. En algunos casos, los choferes se alineaban con sus patrones en favor de un incremento de la tarifa del transporte pues eso podría significar el aumento de su jornal, alejándose temporalmente de los intereses de otros sectores populares. En otros casos, los sindicatos de choferes tomaban distancia de los empresarios denunciando la explotación a que eran sometidos (largas jornadas, pago al destajo, no seguridad social ni contrato laboral, etc.) sin tomar claro partido en torno al alza de tarifas.

Claro está que también hubo muchos ejemplos de complementariedades y solidaridades, al menos verbales, en las respectivas luchas. Pero uno y otro elemento -divergencia o convergencia- consolidan nuestras hipótesis sobre la heterogeneidad de la sociedad civil, incluso de la mal llamada popular, y reivindican la existencia del conflicto en su interior. En teoría, la sociedad civil dista de ser el reino de la armonía pura para ser en realidad terreno de conflictos y de la búsqueda de resolución no siempre por vías pacíficas. Esto es válido, tanto en su relación con el Estado, como en su funcionamiento interno. Así lo ilustra el caso colombiano durante los años estudiados, a pesar de que los actores no lo comprendieran del todo.

En medio de la heterogeneidad de los movimientos sociales como tales y de la incipiente sociedad civil, se insinúa un elemento que, sin dar homogeneidad, sí atraviesa a las diversas expresiones de las luchas sociales de esos años: la presencia de los sectores medios o la llamada clase media<sup>79</sup>. En algunas de las protestas estudiadas las capas medias eran un contingente importante -estudiantes o cívico-regionales-, en otros, se destacaron en el liderazgo (obreros y campesinos). En el caso laboral, la presencia de empleados y funcionarios del Estado en el mundo sindical y su mayor protagonismo huelguístico son evidentes a lo largo del Frente Nacional. Bas-

te recordar el peso de las huelgas de sectores como magisterio, salud pública, rama judicial o bancarios para ilustrar esta apreciación<sup>80</sup>. Para el movimiento campesino sucede otro tanto. No sólo la organización campesina albergaba importantes contingentes de campesinos medios y acomodados sino que los dirigentes de la Anuc, por lo general pertenecieron a los estratos medios del campo y contaban con cierta educación formal. De hecho, muchos de ellos habían sido dirigentes de organizaciones agenciadas por el Estado como las Juntas de Acción Comunal o por el clero tales como ACPO (Acción Cultural Popular en torno a radio Sutatenza) o la filial campesina de la UTC, la FANAL. Esto para no mencionar a los innumerables estudiantes que, con pensamiento mesiánico e influidos por la izquierda, fueron a trabajar con el "pueblo" y cuyos rostros, aunque ocul-

tos o mimetizados, también ocupan su lugar en las movilizaciones de esos años. Los sectores medios, por más imprecisos que sean sus contornos, o tal vez por ello, se hacen presentes en todos los movimientos sociales dándoles una dinámica que deberemos analizar con cuidado.

### Los partidos políticos y el vacío de intermediación

La relación entre los partidos políticos y las protestas sociales durante el Frente Nacional es muy compleja pero en general podemos aventurar la hipótesis de que no apuntó a consolidar la esfera social en forma autónoma. La responsabilidad es conjunta y no se puede atribuir a una perversión de la acción política<sup>81</sup>. La forma como se resolvieron los

75 Referencias tomadas de la reconstrucción del CRIC, Diez años de lucha: Historia y documentos. Bogotá: Cinep (*Controversia* Nos. 91-92), 1981, págs 74 y 165.

76 Ibid. pág. 162

77 Ibid. págs. 155-164. Christian Gross señala que la misma lucha por la tierra tenía matices diferentes entre los campesinos 'la tierra para el que la trabaja' y los campesinos-indígenas pues éstos insistían en recuperar sus resguardos lo que significaba no sólo defender la tierra sino formas de cultura y de autoridad consideradas como propias, así algunas sean herencia colonial (*Colombia indígena*. Bogotá: CEREC, 1991, pág 186). Un punto para indagar en periodos posteriores es la relación entre aspectos legales y la ampliación de la identidad de esta minoría étnica, pues parecen favorecer cierta 'indigenización' de algunos campesinos con ancestro indígena.

78 En uno de los tantos análisis que hizo Jaime Caycedo del movimiento estudiantil expresaba que éste no podía ser vanguardia sino que debía acompañar a los sectores populares. En febrero y marzo de 1970 el pueblo acompañó al movimiento estudiantil en su lucha antiimperialista mas no en sus tesis abstencionistas ("Movimiento juvenil, movimiento estudiantil y unidad popular", *Documentos Políticos*, No. 91, enero-febrero 1971, pág. 9). Según el mismo autor, en entrevista personal en diciembre de 1996, ese divorcio se superó en parte durante los setenta. Las tensiones, como lo señala un artículo de José M. Pérez, llegaron a abarcar también a los dos estamentos universitarios: estudiantes y profesores (*Documentos Políticos*, No. 93, mayo-junio de 1971, págs. 31-42).

79 Aunque difíciles de precisar en teoría, pues no responden a una clase en el sentido socioeconómico, los sectores medios cada vez son más aceptados por los analistas sociales como una categoría que refleja a las capas profesionales, generalmente urbanas, signo de movilidad social. Wright Mills (La élite del poder. México: Fondo de Cultura Económica, 1973, págs. 244-246), refiriéndose al caso norteamericano habla de una vieja clase media -pequeños propietarios y empresarios- y de otra nueva -empleados de 'cuello blanco'. La presencia de esos sectores medios en los movimientos sociales ha sido señalada, entre otros por Claus Offe, "New Social Movements: Challenging the boundaries of Institutional Politics", *Social Research*, Vol. 52, No. 4, invierno de 1985, págs. 831-832). Para Offe, estas capas medias -viejas y nuevas-, junto con población disponible son los actores del nuevo paradigma social, pero al contrario de los del anterior paradigma no actúan bajo criterios estrictamente clasistas sino en beneficio de colectividades de amplia afiliación y por demandas no siempre materiales.

80 Grosso modo casi la mitad de ellas fueron adelantadas por los sectores enumerados. El sólo magisterio aportó una cuarta parte de las huelgas y más de la mitad de los huelguistas entre 1961 y 1990 (A. Delgado, ¿Dónde está...?, págs. 79-89). El creciente protagonismo de los, hasta ese momento considerados empleados, no se reflejó, sin embargo, en cambios sustanciales en las composiciones de las directivas sindicales. Una somera mirada a los ejecutivos de las centrales tradicionales muestra que de 22 dirigentes de la UTC entre 1946 y 1974, uno provenía de los trabajadores oficiales y otro de la banca, aunque un par figuraban como asesores técnicos sin clara procedencia. En el caso de la CTC para 1976 se nota la presencia de ferroviarios y trabajadores de puertos, en medio de muchos sin claro origen sindical y de sólo dos provenientes de sectores de empleados (ICT y empleados del Distrito). Véanse sendos artículos del mismo Delgado "En torno a la crisis de la UTC" y "La descomposición del patronalismo sindical" aparecidos en *Estudios Marxistas* No. 9, 1975 pág. 50 y No. 13, 1977, pág. 47 respectivamente.

81 Aquí nos alejamos de las lecturas que tienden a satanizar la política (v.gr. Alain Touraine en *América Latina, política y sociedad*. Madrid: Espasa-Calpe, 1989) para acercarnos a quienes la ven como la necesaria intermediación ante el Estado con sus virtudes y defectos (v.gr. Fernando Escalante, *El principito o al político del porvenir*. México: Ed. Cal y Arena, 1995).

conflictos y el recurso permanente de la violencia son parte de la explicación<sup>82</sup>. Para desmenuzar esta tesis es necesario distinguir entre los partidos que estuvieron incluidos en el pacto bipartidista (partidos tradicionales Liberal y Conservador) y los excluidos (oposición institucional como el MRL o la ANAPO y extrainstitucional que abarcó a los diversos grupos de izquierda) pues desempeñan papeles diferentes en la supuesta mediación ante el Estado, aunque el resultado eventual sea la misma debilidad de los actores sociales.

El Partido Liberal que propició en los años 30 y 40 la incorporación del movimiento obrero y en los 60 la del movimiento campesino, no lo hizo en la forma decidida y coherente observada para casos como el peronismo en Argentina, Acción Democrática en Venezuela, el APRA en Perú o el PRI en México<sup>83</sup>. En el caso colombiano, no sólo fueron intentos de incorporación débiles y recortados, hechos en breves períodos como la Revolución en Marcha, sino que el liberalismo rápidamente se conservatizó dejando un serio vacío en el centro del espectro político<sup>84</sup>. Esto se hizo evidente en los años del Frente Nacional cuando en el marco del pacto político, el Partido Liberal oficialista (cada vez menos diferenciado del Conservador) no movilizó al pueblo limitándose a controlar organizaciones sociales creadas desde arriba (las JAC y la ANUC al principio). Cuando ello no ocurrió, jugó a dividirlos como sucedió con la expulsión de los sindicatos influidos por los comunistas de la CTC en 1960. La presencia del MRL sirvió temporalmente para controlar sectores sociales que tendían a radicalizarse o a excluirse de la escena política. Tal fue el caso de antiguos guerrilleros liberales y de jóvenes universitarios desencantados con el bipartidismo<sup>85</sup>. La lenta inclusión del MRL en el Frente Nacional dejaría a esos sectores sin mayor representación política, posibilitando su mayor radicalización.

Sería injusto, sin embargo, desconocer el apoyo que el liberalismo oficial siguió brindando a las dos centrales, especialmente a la CTC, a la que consideraba afiliada, aunque la UTC contara con una mayoría de liberales en su directiva. En el período de Carlos Lleras se hizo más evidente el intento de acercamiento político a esas centrales. El presidente asistió a sus congresos, costumbre no muy común ya avanzado el Frente Nacional, e incluso visitó sus respectivas sedes ofreciéndoles respaldo en los proyectos inmediatos de vivienda y de cooperativismo en los que estaban embarcados las centrales<sup>86</sup>. Estos pasos fueron vistosos pero poco efectivos en términos de real integración

del movimiento laboral y de todas formas dejaban de lado a importantes sectores del sindicalismo que no se agrupaban en las dos centrales aludidas.

Pero el caso más dramático de abandono político fue el de la universidad pública por parte del bipartidismo y en particular del liberalismo que había sido la fuerza hegemónica allí, salvo en las universidades confesionales. Aunque este punto no ha sido trabajado sistemáticamente en la literatura secundaria sobre el tema -general-

mente no se pasa de un fugaz señalamiento- merece ser analizado. El abandono del que hablamos no es tanto financiero o por ausencia de proyectos de reforma universitaria. En cuanto a lo financiero, aunque se denunció el descuido estatal, las cifras hacen dudar de la veracidad de esta consigna. Según estadísticas del DANE, entre 1961 y 1969 hubo un aumento constante, salvo un bajón en 1966, del aporte del Estado por estudiante a la Universidad Nacional en pesos reales<sup>87</sup>. Otro es el problema de financiamiento de la investigación o la remuneración de los profesores, aspectos de mayor descuido estatal.

En relación con los proyectos de reforma del sistema universitario los hubo, ejemplos fueron el Informe Atcon, el Plan Básico en los sesenta, y el del ministro Galán a principios de los setenta, quien

*No existe una  
dinámica  
homogénea de las  
protestas sociales  
por parte de los  
sectores que las  
adelantan.*

hábilmente recogió algunas demandas del Programa Mínimo del movimiento estudiantil. Pero fueron reformas a medias, favorables al sector privado, lesivas de la autonomía universitaria en puntos como la composición de los órganos directivos, y de corta duración, tal fue el caso del cogobierno propiciado por Galán. Por ello, la imagen del sistema universitario de esos años es de caos: crecen las universidades privadas y en el sector público brotan las regionales, afloran paralelamente tecnológicos y centros de muy baja calidad sin que se vea la actividad reguladora del Estado para garantizar el tipo de educación que se ofrece. Hay expansión de la población universitaria sin duda, pero ello no se corresponde con la capacidad de empleo formal de la economía. Según el mismo DANE, la matrícula universitaria pasó de 22.660 en 1960 a 67.486 en 1968<sup>88</sup>. ¡En cuestión de 9 años se triplicó! El resultado fue mayor frustración, lo que de alguna forma se reflejará en la acelerada radicalización del movimiento estudiantil.

Sin embargo, el principal abandono de la Universidad por parte del liberalismo estuvo en el descuido de su intermediación política. El Partido Liberal se

sustrajo de las organizaciones estudiantiles y de las grandes movilizaciones, en lo cual tiene que mucho que ver su conservatización y la pérdida de banderas sociales. Donde conservaba presencia, como en la Universidad Libre, se enfrascó en peleas intestinas dando un pésimo ejemplo de inmoralidad. Dejó así el espacio vacío para ser llenado por discursos radicales alimentados por procesos como los arriba descritos y por imaginarios internacionales, en especial la revolución cubana. Como lúcidamente lo vio un articulista de la revista *SETT* (segunda época), la universidad estaba atravesada por un conflicto en el que las partes hablaban dos lenguajes: el de "los estudiantes, subjetivamente a un paso de la revolución...", decantado dentro de la respectiva posición ideológica y hermetizado a fuerza de clisés"; y el del gobierno que les respondió como si fuera 1949 con "un idioma de fuerza para hacerles frente". La Universidad, concluye el autor, "está en un callejón sin salida pues ni el marxismo justifica que ella sea vanguardia, ni el liberalismo justifica el uso de la violencia estatal para controlarla"<sup>89</sup>. Sintomáticos de la radicalización estudiantil y de la distancia que se trazó con la tradición política co-

- 82 Daniel Pecaú llama la atención sobre este fenómeno que es poco propicio para el surgimiento en el largo plazo de actores sociales y aún políticos (*Crónica de dos décadas de política colombiana, 1968-1988*. Bogotá: Siglo XXI, 1988, págs. 23-25).
- 83 Esta comparación surge de la lectura del citado libro de los Collier, *Shaping the Political Arena*.
- 84 Aunque la tendencia de los partidos incorporadores a conservatizarse es común a los casos vistos por los Collier (*ibid.*), nuestro liberalismo lo hizo desde los inicios de la Guerra Fría, con el paréntesis no querido de la movilización de Gaitán, quien para fortuna de ese proyecto fue asesinado en el 48. Ya para 1950 el Partido Liberal quería expulsar a los sindicatos comunistas de la CTC (Documentos publicados en ACHSC, No. 18-19, 1990-1991, págs. 309-335). Si no se logró el acercamiento con el conservatismo fue porque éste giró hacia una derecha cercana al franquismo alimentando con imaginarios decimonónicos la orgía de violencia (véase Dario Acevedo, *La mentalidad de las élites sobre la Violencia en Colombia (1936-1949)*, Bogotá: El Ancora Eds., 1995).
- 85 Así lo confirma el estudio de Alejo Vargas, *Magdalena Medio santandereano. Colonización y conflicto armado*. Bogotá: Cinep, 1992.
- 86 Véase Tulio Cuevas, *Por una democracia social*. Bogotá: Ed. Revista Colombiana Ltda., 1970, pág. 30 y *Liberación Obrera*, No. 49, enero de 1967, págs 1 y 6 y No. 62, julio de 1968, págs. 1-3. En el discurso pronunciado por José Raquel Mercado para saludar al Presidente afirmó que la visita no significaba que la organización estuviera de rodillas ante el gobierno y por eso le presentaron un largo pliego de reclamos y peticiones (*ibid.* No. 62, págs. 1-3). De hecho la CTC se distanció a fines de ese año del gobierno en torno a medidas como la creación del Fondo Nacional del Ahorro y la convocatoria del Consejo Nacional del Trabajo, tanto que llegó a sumarse a la amenaza de paro a inicios del 69, para retornar rápidamente al diálogo (ver Nos. 66 y 67, nov-dic de 1968 y enero de 1969 respectivamente).
- 87 En precios constantes se pasó de \$3.402 en 1961 a \$5.625 en 1969 (DANE, Colombia estadística. Bogotá: DANE, 1975, pág. 9). Por esa época no sólo el movimiento estudiantil sino el profesorado y aún directivas universitarias insistían en el incumplimiento del Estado en sus compromisos financieros con la universidad pública. El profesor de economía, Jaime Puyana, y el dirigente profesoral, y futuro rector, Ramses Hakim, aducían un descenso en los aportes del Estado en los ingresos totales de la Universidad Nacional: del 87% en 1960 a 78% en 1969 (*Flash*, 15-30 de abril de 1971, págs 12-26). Eran épocas en las que se pensaba que el Estado debía dar todo...
- 88 DANE, Colombia estadística, pág. 9 De esos la Universidad Nacional recogió entre 6.479 en 1960 y 12.530 en 1968. Apenas se duplicó su población universitaria lo que a todas luces muestra un descenso en su participación en el conjunto de la educación superior.
- 89 Serie de tres artículos "Trayectoria histórica de la universidad" escritos por Fernán Torres en la revista *SETT*, Nos. 8-10, 1974, págs. 29-42, 57-74 y 65-78 respectivamente. Por la misma vía, pero sin la lucidez del anterior, está el artículo del ex-rector de la U. del Tolima, Leovigildo Bernal, "Universidad, anarquismo y democracia" (*ibid.*, No. 11, 1974, pág. 55)

lombiana fue el derrumbamiento de las estatuas de Miguel A. Caro y el general Santander que estaban en el campus de la Universidad Nacional, ocurridas en 1962 y 63 respectivamente<sup>90</sup>.

Lo dicho sobre el alejamiento del liberalismo puede hacerse extensivo al conservatismo, el cual desempeña también algún papel incorporador en el pasado de sectores populares, en particular durante el gobierno de Ospina Pérez, papel igualmente diluido en años posteriores sobre todo en el marco del pacto bipartidista. En algunos casos, el afán de protagonismo o la milimetría exigida por alguna fracción del conservatismo tuvo resultados nefastos en la universidad. En la temprana movilización estudiantil contra Mario Laserna, en 1958, el laureanismo lo único que acató a decir fue que el rector era conservador 'independiente' y lo denunció por no aplicar la paridad en la dirección académica de la universidad pues había 16 decanos liberales contra 6 conservadores<sup>91</sup>.

La acción de la izquierda en las luchas estudiantiles y en general en las protestas sociales durante el Frente Nacional, por razones obvias, tendió a copar el espacio dejado por el bipartidismo, pero tuvo resultados similares en cuanto al debilitamiento de los actores sociales. Veamos rápidamente, ese otro lado de la moneda<sup>92</sup>. No debe olvidarse, sin embargo, que en la llamada izquierda militaban distintas tendencias que iban desde un crudo foquismo hasta un tímido coqueteo con la acción electoral y parlamentaria, aunque el paradigma del guerrero -desde una particular lectura del leninismo- fuese el dominante.

En el caso estudiantil la presencia de la izquierda fue más impactante porque se articuló a la radicalización descrita. Si en algún sector estuvo cerca de la hegemonía fue aquí, al menos entre el estudiantado de las universidades públicas. Sus distintas tendencias orientaron las luchas, contribuyeron a crear organizaciones locales (Consejos estudiantiles) y na-



cionales (UNEC primero y particularmente la FUN) y, sobre todo, aportaron la ideología a la movilización. Pero el resultado de esta acción fue precario, precisamente porque utilizó al estudiantado con fines también instrumentales, como en el pasado lo había hecho la derecha. El proyecto de los grupos de izquierda era la toma del poder y no la reforma de la universidad, aunque allí hubo matices importantes pues el PCC intentaba articular más las transformaciones a su proyecto político que los grupos foquistas, para los cuales la lucha armada era todo. La izquierda más radical trató de sobreponer sus consignas estratégicas sobre las demandas inmediatas, sin preocuparse mucho por la ilegalización de las organizaciones gremiales (como ocurrió con la FUN a mediados de los sesenta), y en no pocas ocasiones sustrajo a los mejores líderes estudiantiles para la lucha armada, sacrificándolos al poco tiempo por razones sectarias<sup>90</sup>. Pero la izquierda reformista no se quedaba atrás en los intentos de manejar el movimiento estudiantil y someterlo a su estrategia. En ese sentido, el conjunto de la izquierda buscaba más el control de aparatos para sus fines políticos que el desarrollo autónomo del movimiento estudiantil. De ahí que las prácticas de rapiña y divisionismo entre las distintas tendencias hayan sido pan de cada día, a pesar de los discursos unitarios que cada quien predicaba.

Lo sucedido en el caso estudiantil se reprodujo con menos alcances en otros sectores sociales, pues

en éstos la izquierda no fue la fuerza hegemónica. Pero aún allí hubo brotes de hegemonismo. En el paro del magisterio de 1972 se denunció que sectores de extrema izquierda querían utilizarlo con fines abstencionistas prolongándolo inútilmente. A su vez estos sectores denunciaban intereses electorales en las otras fuerzas políticas<sup>94</sup>.

Pero el balance de la presencia de la izquierda en los movimientos sociales no es del todo negativo. Sería una lectura no sólo injusta sino ahistórica. Hubo creación de organizaciones -el caso más ilustrativo fue el de la CSTC la cual, sin el PCC, difícilmente hubiera sobrevivido a sus casi 15 años de no reconocimiento legal-, formación de dirigentes -la ANUC es también ejemplo de las virtudes y los vicios de la presencia de la izquierda-, orientación de las luchas y hasta articulación temporal de movilizaciones nacionales de los distintos sectores. Incluso en algunas regiones y zonas, la izquierda logró un real arraigo al interpretar acertadamente las necesidades de los pobladores. Pero en general las organizaciones de izquierda, por el privilegio político de la acción militar sobre la electoral, opusieron a la exclusión desde arriba la autoexclusión; no fueron mediadoras entre la sociedad civil -aún de los sectores que controlaban- y el Estado, y en las pocas circunstancias que lo fueron, lo hicieron en un ámbito local y en contra de sus creencias estratégicas. En general, la izquierda se sustrajo de la política para hacer la guerra aunque

90 Reportaje a Victor D. Bonilla en revista *Flash*, 15-30 de abril, 1971, págs 12-26. Luego vendría la historia de la explanada central bautizada por el gobierno Plaza Santander y por los estudiantes Plaza Ché.

91 Semana 25, nov., 1958, págs 15 y 16. Sobre este conflicto usó la revista una frase profética: "(ha) comenzado a agitarse no sólo el hasta ese momento tranquilo remanso de la Ciudad Blanca sino también el calmado mar del Frente Nacional".

92 Tema abordado con más detalle en anterior artículo ya citado ("¿Utopía armada?...")

93 Jaime Arenas escribió un artículo, poco antes de su asesinato, en el que llamaba la atención sobre la relación no recíproca entre movimiento estudiantil y guerrilla en la que veía una exagerada presencia campesina. "La visión más universal -ecuménica- del estudiantado y por tanto su mayor amplitud de conceptos, choca -en ocasiones violentamente- con el criterio localista y con la cortedad de miras de los campesinos que constituyen el 95% de la guerrilla". Si ésta estimula la concientización de los universitarios, la lucha estudiantil "no tiene ninguna repercusión en la guerrilla" (*Flash*, 16-30 de abril, 1971, págs. 28-32).

94 Algo de ese debate se refleja en *Documentos Políticos*, No. 99, mayo-junio de 1972, págs. 33-49.

95 El ejemplo que se criticaba era la CTC y su estrecha relación con la suerte del liberalismo. "Uno de los factores que contribuyó a la creación de la UTC, fue el deseo sincero de sus fundadores de organizar una central independiente y apolítica... Por eso en sus Estatutos y Plataforma de Lucha (se) dejó expresa prohibición a sus dirigentes de participar en actividades de tipo político-partidista" (Justiniano Espinosa, *Los sindicatos y la política*. Bogotá: Ed. Justicia, 1959, pág. 18). Desde la perspectiva ingeniosa de Fernando Escalante, la posición de Espinosa y de la vieja guardia de la UTC, en la cual militaba el rival de Cuevas, Antonio Díaz, podría ser leída como una reproducción de la mirada "virtuosa" de la política, impregnada del moralismo cristiano (El principito...).

en muchos casos no fue más que en forma verbal. Con ello no hizo sino seguirle el juego a los partidos políticos tradicionales que la querían excluir a toda costa.

Ante este vacío de intermediación política, algunos dirigentes de movimientos sociales intentaron, en vano, promover una salida de centro. El mejor ejemplo de este propósito fue el dirigente de la UTC, Tulio Cuevas. Rompiendo con la tradición apolítica de esa central, Cuevas esbozó en esos años una alternativa diferente cercana a la social-democracia. En opinión de los antiguos dirigentes de la UTC como Justiniano Espinosa, la acción sindical debía circunscribirse a las grandes opciones políticas como la defensa de la democracia contra la dictadura o del bipartidismo y no mezclarse para nada con los trajes electorales<sup>95</sup>.

Cuevas, por el contrario, desde mediados de los sesenta rompió con esas posturas y planteó cada vez más claramente la necesidad de meterse en la política para tener "mayor injerencia en la organización total del Estado"<sup>96</sup>. Por tanto, había que llegar al parlamento con un partido propio (el efímero MOSPOL) o con los partidos tradicionales. En 1969, en el congreso de la UTC en Pereira, hizo un llamado para que la central no se limitara a luchar por los derechos laborales, "debe proyectarse hacia una modificación radical de la estructura social". A renglón seguido, planteó explícitamente la necesidad de llegar, como trabajadores, al parlamento para no ser más idiotas útiles: "Las organizaciones sindicales son utilizadas por los partidos políticos como instrumentos electorales...La vida moderna, las necesidades de los tiempos, demandan que asumamos la actitud de organizarnos políticamente como partido." Ese 'partido' estaría entre los rojos y azules con banderas propias de paz, justicia y orden. Para concluir exclamaba: "Ya no seremos más votos cautivos sino votos libres"<sup>97</sup>. Para mayo del 69 se retrajo a posiciones más frentenacionalistas al señalar que "los obreros... no vamos a constituirnos en partido; pero vamos a propiciar la formación de un gran movimiento político al cual podamos prestar o retirar apoyo"<sup>98</sup>. Finalmente

Cuevas terminó adhiriendo a la candidatura de Belisario Betancur, paso en el cual fue secundado por el ejecutivo de la central. Su distancia con el Frente Nacional siguió creciendo durante el gobierno Pastrana. A fines de 1970 volvió a llamar a una acción obrera "firme y radical" ante la disolución práctica de los partidos tradicionales. Con lenguaje cristiano insistía en un orden social justo y equitativo en contra de los proyectos desarrollistas del último gobierno del pacto bipartidista<sup>99</sup>.

El discurso era novedoso pero difícil de llevar a la práctica. Los pobres resultados del Mospol a mediados del decenio muestran la dificultad de formar toda aparte de los partidos tradicionales<sup>100</sup>. Algo similar ocurrió con la adhesión a Betancur quien de todas formas era disidente de la candidatura frentenacionalista de Pastrana. A los campesinos de Manatí les pasó en pequeño lo mismo. En 1962, cuando se lanzaron con candidatos propios, sólo lograron representación en el concejo local; en 1964 eligieron por fin un diputado departamental del que luego se distanciarían<sup>101</sup>. Con modificaciones, esa fue la misma experiencia de la izquierda que participó en elecciones, adherida al MRL o a otras opciones de oposición parlamentaria. El espacio de la acción política estaba copado institucionalmente por el bipartidismo. Se fortalecía así el hiato entre acción reivindicativa y política que impedía una representación directa de los sectores sociales. La alternativa que quedaba era poca, de ahí que el discurso guerrillero haya tenido acogida en sectores de oposición, tentación en la que no cayó el grupo de Tulio Cuevas. Aunque no tuvo gran éxito electoral como grupo -Cuevas fue elegido por fracciones conservadoras al parlamento-, su concepción política sí modificó la acción sindical de la UTC que dejó de ser fiel instrumento bipartidista llegando en ocasiones a oponerse al Frente Nacional, como sucedió en los paros del 69 y 71, en una posición más acorde con los intereses laborales que la CTC. La central no sólo hizo unidad de acción con los sindicatos influidos por la izquierda, sino que planteó pautas de acción sindical que incluso iban en contra de las que le dieron origen en los años cuarenta. Por ejemplo, postuló la necesidad de re-

emplazar el sindicalismo de base por el gremial o de industria y la necesidad de trascender la negociación colectiva y de hacer acción política<sup>102</sup>.

Esto nos lleva al último punto en la crítica relación entre partidos políticos y actores sociales: recurrir a la violencia para resolver los conflictos. Los intentos de control de los actores sociales por las distintas fuerzas políticas tienen el resultado paradójico -en términos de Daniel Pecaute- de dejar abandonada la sociedad civil a sí misma. A ella no se la tenía en cuenta sino como carne de cañón para los proyectos estratégicos de derecha o izquierda. Las fuerzas políticas recurrían a la violencia -represiva o instrumentalizadora- para tener éxito. Con ello restringían la autonomía de los actores sociales y peor aún, amenazaban su misma existencia física. Allí fue cuando adquirió gravedad la ausencia de un partido de centro con vasos comunicantes hacia los sectores populares o de una izquierda menos guerrera y más política. Se dio un gran vacío para la resolución de conflictos y la mediación ante el Estado. De esta forma el recurso a la violencia, práctica utilizada desde fines de los cuarenta, se hizo más recurrente. Algunos movimientos sociales llegaron a pensar que esa era la salida para adquirir fuerza, pero el resultado neto fue su mayor debilidad porque el juego de la guerra tiene leyes ajenas a las de construcción de sociedad civil<sup>103</sup>. Cuando un sindicato o una asociación campesina piensa que la so-

lución de sus demandas yace en la acción armada o en la sumisión ante el Estado y sus fuerzas armadas, no hay visos de real autonomía. La fuerza que derivan temporalmente es externa a ellos y no da réditos en el largo plazo. Esa fue la trampa de la acción social colectiva durante el Frente Nacional y de ese "círculo infernal" no se salió, por el contrario se profundizó con graves consecuencias para el futuro del país. La responsabilidad, como ya dijimos, fue conjunta y no se puede atribuir a un solo actor.

### El Estado y la protesta social

Hablar de divorcio entre Estado y movimientos sociales es no debía sorprender a un historiador del Frente Nacional. Esto no quiere decir que acudamos a la manida lectura del Frente Nacional como un período de exagerado autoritarismo. Daniel Pecaute insiste en que muchos rasgos oligárquicos del régimen bipartidista vienen de tiempos anteriores y que éste, al contrario de las dictaduras militares del cono sur, nunca suprimió la autonomía de la sociedad civil<sup>104</sup>. Lo que interesa en estas páginas finales es analizar la creciente enemistad entre el Estado y los movimientos sociales durante el Frente Nacional. De hecho, el discurso de aquellos tendía a reivindicar la ruptura tal vez con el fin de justificar su acción o la de los actores políticos que los orientaban.

96 Por una democracia social... pág. 29. No debe olvidarse que Tulio Cuevas simpatizó primero con el socialismo y luego fue cercano a la dictadura de Rojas, por lo que nunca fue considerado un líder muy ortodoxo en las filas del sindicalismo tradicional.

97 Ibid. págs 70-72. En entrevista a la revista Flash dice que ese 'partido' debe ser laborista de avanzada y que los partidos actuales son obsoletos e inoperantes (3, marzo de 1969, pág. 9)

98 Ibid. pág. 84. Al regreso de Moscú, además de hablar de la cercanía de cristianos y marxistas en la lucha contra la explotación y de su admiración por los curas de Golconda, vuelve a proclamar la necesidad del partido laborista (págs 87-93).

99 *Flash*, 1-15 de diciembre, 1970, págs. 20-30.

100 Daniel Pecaute, *Política y sindicalismo...*, pág. 266

101 *Revista Tierra*, No. 40, abril-junio de 1967 págs. 37 y 50, e informe citado de Helena Useche.

102 *Flash*, 1-15 de diciembre, 1970, págs 20-30.

103 Pecaute claramente lo señala: "Ciertamente la represión interviene, pero lo propio de Colombia es que los actores sociales se constituyen siempre, en alguna medida, en un horizonte de pruebas de fuerza... Las clases dominantes saben que la fuerza es un componente de las relaciones sociales. La izquierda también." (Crónica... pág. 23)

104 Pecaute, *Introducción a Crónica...*, págs. 9-36.

Uno de los factores que más incidió en la lectura del conflicto social que hicieron tanto el Estado y los sectores dominantes como los mismos luchadores populares fue la "Guerra Fría". Unos y otros enmarcaban las protestas en la tensión capitalismo-comunismo, lo cual no permitió ubicarlas en el punto real, sino que potencializó antagonismos que perjudicaban la negociación. Los petroleros lo percibieron con claridad al inicio del régimen bipartidista al declarar en su congreso de 1959 que aspiraban "a que el Frente Nacional no destierre simplemente el sectarismo político, sino también el sectarismo clasista que recurre a señalar como enemigo del Frente Nacional a todo movimiento reivindicatorio del obrerismo"<sup>105</sup>. El presidente Lleras Restrepo, para justificar la represión al movimiento estudiantil que lo había enfrentado no sólo desconoció a la FUN por utilizar "un lenguaje provocador, insolente, salpicado de cierta jerga comunista" sino que dijo con crudeza que él es enemigo "de la universidad que tratan de crear los comunistas"<sup>106</sup>. Una huelga petrolera, la denuncia de fondos extranjeros en las universidades que coartaban su autonomía, una invasión de un terreno urbano o la defensa de mejoras en el terruño, podían ser leídos como "penetración comunista" y respondidos como tales. Pero del otro lado, también había la percepción de que esas luchas corrían el riesgo de ser cooptadas por el Estado, por lo cual debían ser "protegidas" a como diera lugar. Ello, y el afán de controlar organizaciones populares, condujo a la instrumentalización de esas luchas por parte de la izquierda, imitando prácticas viejas de la derecha. Hasta aquí la historia de una enemistad fruto de imaginarios internacionales que no es sorprendente.

Lo que sí causa sorpresa es que, de preguntarse por los desafíos reales que pusieron los movimientos sociales al régimen bipartidista, la respuesta sea negativa. Hubo divorcio pero no revolución. Los análisis comparativos en el contexto latinoamericano muestran la relativa debilidad de los actores sociales colombianos en ese período<sup>107</sup>. Pero no hay que ir tan lejos para constatar que la protesta social no llegó a poner en serios aprietos al régimen bipartidista. Hubo momentos críticos cuando la protesta se gene-

ralizó (mediados de los sesenta y principios de los setenta, especialmente febrero-marzo de 1971) y causó temor entre las elites pero sin producir modificaciones sustanciales en el rumbo político. Tanto que el régimen bipartidista culminó más o menos como se había diseñado 16 años antes<sup>108</sup>.

Pero si los movimientos sociales no fueron un serio desafío al Frente Nacional, ¿porqué se enemistaron? En un principio no fue así. El régimen bipartidista se inició con un gran respaldo popular. Pero el apoyo electoral disminuyó rápidamente a los dos años de inaugurado, para recuperarse levemente durante las elecciones presidenciales. No todo el abstencionismo se puede endosar a la oposición, aunque evidencia signos de creciente divorcio político. Pero este es un resultado posterior. En la historia oficial del Frente Nacional hubo diversos enemigos, al menos si nos atenemos a las justificaciones de las declaraciones de Estado de Sitio<sup>109</sup>. Primero fueron los intentos golpistas (atribuidos al rojaspinillismo pero con sospechas de apoyo por parte de facciones incluidas en el pacto político), luego fueron las presiones obreras ante las reformas económicas (exigidas por sectores de la elite o por la banca internacional), y hacia fines de los sesenta los movimientos urbanos, especialmente estudiantiles, fueron la disculpa para declarar la excepción institucional. Llama la atención que no hayan sido las luchas campesinas e incluso las acciones guerrilleras las que provocaron la mayor reacción estatal. En términos de imaginarios para el Estado las movilizaciones urbanas representaron más peligro que las producidas en el campo. Según la *Nueva Prensa*, los estudiantes razonaban así en uno de los primeros conflictos: "para este gobierno los estudiantes eramos héroes cuando se trató de tumbar la dictadura... y hoy cuando luchamos por nuestros derechos, por nuestra universidad atacada y por el pueblo, se nos llama subversivos y se nos califica de agitadores"<sup>110</sup>. En cualquier caso, el Frente Nacional creó sus enemigos y los agrandó o disminuyó a su conveniencia. Pero, ¿de dónde provino la enemistad de los movimientos sociales hacia el Estado?

La raíz es la misma que aducíamos para los partidos tradicionales -los usufructuarios del poder estatal-: el descuido de lo social por parte del Frente Nacional. Precisemos en qué consiste esta tesis pues si se observan las cifras de gasto social las conclusiones pueden ser diferentes<sup>111</sup>. En promedio el gasto social (educación, salud, trabajo, agricultura y vivienda) para los años estudiados alcanzó el 28.62% del gasto total, un poco superior al gasto en seguridad (justicia, fuerzas armadas y policía), que fue del 25.90%. Tal vez más significativo es que este gasto social aumentó paulatinamente a lo largo del Frente Nacional llegando hasta llegar al 47.2% del total en 1974. La tasa de participación en el PIB varió en proporción similar: del 1.10% en 1955-1959 se llegó a 5.43% para 1970-1974<sup>112</sup>. El rubro de educación, también en aumento constante, representó en promedio el 13.63% del gasto del Estado para esos años. Según el DANE, hubo incluso una evolución positiva en la relación de gastos de inversión sobre los de funcionamiento en la educación: de ser un escaso 9.3% del total en 1960 se pasó a un 23.2% en 1971<sup>113</sup>. Estas cifras parecerían contradecir nuestras afirmaciones sobre el descuido de lo social pues aparentemente se gasta en educación, salud y de forma creciente.

En contraste con estas cifras están las de la protesta social. El magisterio, nombrado desde 1960 por los gobernadores pero pagado por la nación,

fue continuamente a huelga quejándose de retraso en el pago o de bajos salarios. De hecho, fue el sector más combativo al protagonizar el 22.3% de todas las huelgas entre 1961 y 1990, aportando el 59.4% de los huelguistas y el 13.4% de las jornadas perdidas<sup>114</sup>. Algo similar ocurrió con los trabajadores del sector salud aunque en menor proporción. Para ser justos, hay que decir que las motivaciones de las huelgas de este sector no fueron siempre salariales, especialmente entre los médicos<sup>115</sup>.

Las cifras de las luchas cívicas también cuentan. Ya señalábamos que la mayoría de sus protestas durante el Frente Nacional se realizaron por servicios públicos, principalmente energía eléctrica, agua y alcantarillado. El segundo renglón fue obras públicas. Educación y salud ocuparon el cuarto lugar en demandas. Aquí es necesario decir que el gobierno central no fue siempre el responsable de estas ausencias. Desde los años cuarenta hasta los ochenta hubo un tratamiento diferencial de los servicios públicos: en las ciudades más desarrolladas la atención fue adelantada por la administración local, con criterios de empresa privada, y en las áreas menos avanzadas "se plantea la acción de organismos estatales centrales que involucren en su acción criterios asistencialistas"<sup>116</sup>. La excepción son los megaproyectos agenciados por el ejecutivo en zonas no necesariamente atrasadas.

105 *Semana*, 27, enero, 1959, págs 28-30

106 Citas de discursos tomada del citado artículo de Fernán Torres en *SETT*, No. 9, 1974, pág. 58

107 Recordemos lo ya dicho en páginas anteriores sobre este punto y en particular las comparaciones con otros movimientos huelguísticos del subcontinente (véase nota 32).

108 Los analistas como Daniel Pecaú coinciden en que el desafío mayor no provino tampoco de la izquierda armada sino de la oposición institucional, en particular de la Anapo, pero aún en ese caso el régimen salió airoso (Crónica... págs 62 y ss.)

109 Gustavo Gallón, *Quince años de estado de sitio en Colombia, 1958-1978*. Bogotá, Ed. América Latina, 1979.

110 *Revista Nueva Prensa*, 31, mayo de 1961, pág. 19. Podemos agregar que el Estado le restó la importancia requerida al nacimiento de la guerrilla por potenciar a los 'enemigos' urbanos.

111 Ana María Bejarano y Renata Segura en "El fortalecimiento...", págs. 12-21

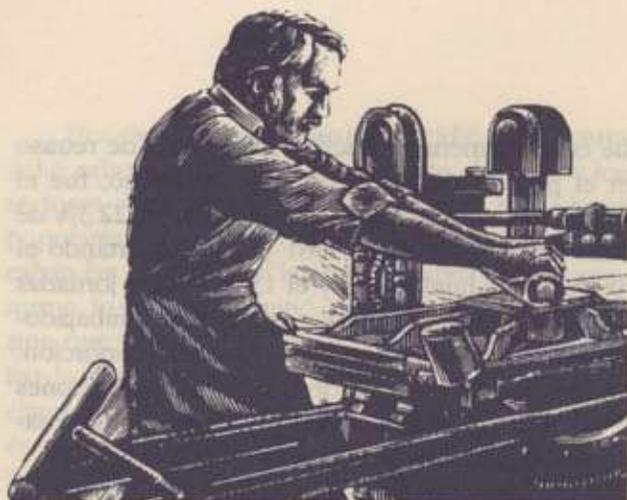
112 Cielo María Numpaque y Ligia Rodríguez Cuestas, "Evolución y comportamiento del gasto público en Colombia, 1950-1994", *Banca y Finanzas*, No. 41, julio-septiembre de 1996, pág. 39.

113 Colombia estadística, pág. 10.

114 Alvaro Delgado, ¿Dónde está...?, pág. 81.

115 Véase el proyecto de tesis de maestría en Historia de Mario Hernández "El sistema político y las reformas de la salud, 1960-1993" (Universidad Nacional, 1996).

116 Samuel Jaramillo, *Ciento veinte años de servicios públicos en Colombia*. Bogotá: Cinep, 1995, pág. 71.



La pregunta que cabe en este momento es cómo explicar la contradicción entre las cifras del gasto público y las protestas de la gente. Se pueden aducir razones de ineficiencia -como el desfase entre el monto del gasto y las necesidades derivadas del crecimiento poblacional del país, malas inversiones o el desvío de los fondos descuidando a los sectores más necesitados-, clientelismo, e inmoralidad, factores estos últimos nada despreciables en nuestra vida política. En términos estadísticos también cabe la posibilidad de que la causalidad se invierta: que las luchas presionen los desembolsos estatales.

También nos planteamos la posibilidad de que el mayor gasto social no correspondiera con una mejor distribución de ingresos, lo que sugeriría que los dineros públicos no estaban llegando a los sectores más necesitados. Según Miguel Urrutia y Albert Berry, para 1964 la distribución de ingresos en Colombia era, en términos comparativos, muy inequitativa<sup>117</sup>. Ello significaba una gran brecha social o como dice Marco Palacios, "uno de los peores cuadros de América Latina"<sup>118</sup>. Las estadísticas en este punto son, sin embargo, poco confiables por la deficiencia en las fuentes. En consecuencia, por esta vía es poco lo que se puede argumentar sobre el descuido de lo social, a no ser que acudamos, como hicimos con el sector laboral, a mirar las necesidades sentidas y su insatisfacción.

Pero para nosotros lo más significativo de dicho 'descuido' no está propiamente en el gasto público o en la mala distribución de ingresos, a pesar de la

importancia que la misma gente le haya atribuido a esos factores o a los más visibles como el costo de vida. El problema es más de fondo y por ello pudo ser imperceptible para los actores en lo cotidiano. Reside en lo que Pecaút designa como el abandono de la sociedad civil a sí misma y que insinuábamos en la sección anterior. El régimen bipartidista no sólo reprimió la protesta social, especialmente la urbana, sino que ayudó a dividir organizaciones sociales y a desestructurar las que tenían más visos de autonomía. Además, como lo señala Jonathan Hartlyn, el Frente Nacional no movilizó al pueblo en favor de sus políticas<sup>119</sup>. De esta forma dilapidó el "capital" político con que contaba al principio. Justo es señalar que estas actitudes oligárquicas no fueron inventadas por el Frente Nacional, por el contrario hacen parte de un tendencia secular de las clases dominantes que se agudizaron desde la posguerra. También es cierto que el Frente Nacional intentó atender a las necesidades de la gente, a veces a la zaga de los acontecimientos y sin un ideario social claro.

A pesar de la alternación presidencial y de la composición paritaria de las ramas del Estado, no hubo mucha continuidad entre uno y otro presidente. Proyectos estructurales importantes como la Reforma Agraria o la Reforma Universitaria se quedaron a medias o retrocedieron entre cuatrenio y cuatrenio. Claro que el Frente Nacional no condenó a los colombianos a morir de hambre. Hubo aumentos de salarios mínimos sustantivos, más en el 62 y 63, y frenos parciales al costo de vida, para sólo citar un ejemplo ya analizado. Pero el balance social es negativo. La razón fundamental reside en que el Frente Nacional debilitó aún más los incipientes movimientos sociales, y no contribuyó a crear un espacio público de negociación pacífica de los conflictos, permitiendo que los diversos actores, incluido el mismo Estado, recurrieran a la violencia. Con sus actitudes excluyentes el régimen bipartidista ayudó a la mayor desinstitucionalización del conflicto social. Por eso una huelga, una invasión de tierras, un marcha estudiantil o un paro cívico no sólo eran ilegales sino que fueron vistos como expresiones de guerra<sup>120</sup>.

## Transformaciones en las identidades colectivas

Un elemento que se ha mencionado en estas páginas, y que debe ser profundizado ahora, es el cambio de identidad en los actores sociales sobre los que ha recaído nuestro análisis. Esa diferencia no es sólo generacional sino de posiciones sociales, roles e imágenes. Hay indudables cambios estructurales que impactaron a los movimientos sociales en su transcurrir a lo largo de esos 16 años. Nos referimos a la consolidación del desarrollo agrario por la vía terrateniente, a pesar de los esfuerzos campesinos por democratizar la propiedad, con la consiguiente expulsión de migrantes a las ciudades sin que actividades como la industria o la construcción los absorbieran. Las ciudades crecieron desproporcionadamente generando déficits en la calidad de vida de sus habitantes<sup>121</sup>. Hubo también profundos cambios en los hábitos y la cultura de la gente fruto de la ampliación del sistema educativo<sup>122</sup>, la incorporación de la mujer al mundo laboral y la transformación de las relaciones familiares, la creciente presencia de los medios masivos de comunicación y la difusión de saberes e ideologías críticas. Todo ello redundó en la pérdida de control de la vida social

por parte de la Iglesia católica y en una mayor secularización. El impacto de estos procesos estructurales en los actores sociales se debe entender en la interacción con el contexto político del acuerdo bipartidista y de la agitación social que hemos descrito. Al fin y al cabo las identidades colectivas no son un simple resultado mecánico del entorno que rodea a los actores que libremente se agrupan en ellas. Las protestas también desempeñan un papel en la forma como se moldean las identidades colectivas.

En el mundo laboral, por ejemplo, la imagen típica del trabajador asalariado al final del Frente Nacional dejará de ser la del obrero manufacturero. Trabajadores de cuello blanco o "empleados" también habitarán ese imaginario trayendo consecuencias serias en términos de una creciente heterogeneidad social del "proletariado". Deja de ser cierto, si alguna vez lo fue, que la clase obrera es un ente homogéneo aún en sus condiciones materiales de existencia. Sin lugar a dudas hubo renovación en las filas laborales. De hecho, los sectores que más hicieron presencia huelguística correspondían a este grupo (magisterio, sector salud, bancarios, etc), mientras que los otros más activos (asalariados del transportes, construcción y producción artesanal) disminuyeron su figuración.

117 *La distribución del ingreso en Colombia*. Medellín: La Carreta, 1975, págs. 299-302. Según los autores, la desigual distribución de ingresos no es imputable sólo al Frente Nacional pues es una tendencia histórica desde los años treinta. Por el contrario, al menos para las actividades urbanas, el decenio de los sesenta mostraba una tendencia a disminuir esa brecha, lo cual es consistente con el aumento de salarios reales que ya describíamos. En posterior estudio el mismo Urrutia sostiene que desde 1964 y especialmente en los gobiernos de Pastrana y López la distribución de ingresos mejoró (Los de arriba y los de abajo. Bogotá: Cerec, 1984, págs. 21-22). Se esboza también la hipótesis discutible de que en los períodos de acelerado crecimiento económico se tiende a deteriorar la distribución de ingresos, lo que sugeriría de nuevo que por momentos el Frente Nacional aumentó la brecha social. En la siguiente sección mencionaremos indicadores preocupantes de la 'calidad de vida' como el déficit de vivienda o el deterioro educativo que hacen dudar de la mirada optimista de Urrutia (notas 118 y 119).

118 *Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994*. Bogotá: Ed. Norma, 1995, pág. 298.

119 *La política del régimen de coalición*, págs. 124-124, 139-140, 142, 155 y 169.

120 Para Pecaut lo ocurrido fue una crisis de regulación estatal que se tradujo en la 'informalización' de la política. El señala en forma similar que la incapacidad para responder a las nuevas demandas sociales, fruto de transformaciones estructurales que se realizan en esos años, crea una crisis de representación, lo cual impide la gestación de nuevas formas de organización (Crónica... pág. 28).

121 El dato de escasez de habitaciones puede ilustrar este punto. En 1960, el déficit de vivienda urbana era de 234.000, en 1970 pasó a 693.000. En ese año el 70% de los habitantes urbanos tenían deficiencias legales o de equipamiento y el 40% estaban hacinados (Gilma Mosquera, "Luchas populares por el suelo urbano", *Estudios Marxistas*, No. 22, 1982, págs. 20-51).

122 Ya veíamos las cifras de la expansión universitaria. En primaria, según el DANE, entre 1960 y 1974 los alumnos matriculados pasaron de 1'690.361 a 3'844.257; los maestros de 44.910 a 123.139; y los establecimientos de 19.516 a 30.558 (en *Colombia Económica*, págs 159-161). Salta a la vista el deterioro en la relación alumno/establecimiento pues mientras los primeros más que se doblan, los segundos escasamente aumentan en la mitad.

En términos de organización sindical también se reflejó un creciente papel de los trabajadores del sector estatal y de servicios públicos. Aunque no representaban sino el 8% de la PEA del país y el 12% del empleo no agrícola, por sus altas tasas de sindicalización, cercanas al 68%, constituían un contingente nada despreciable del mundo sindical de esos años<sup>123</sup>. En 1973, el sector servicios tenía el 18% del total de sindicalizados, el financiero 4.3%, comercio y hotelería el 6.4%. Para completar el cuadro de los trabajadores estatales o empleados de 'cuello blanco' sindicalizados habría que incluir parte del sector de transportes y comunicación, al cual pertenece Telecom por ejemplo, que tenía el 10% de los afiliados y algo de la industria manufacturera, con el 40%<sup>124</sup>. El mayor peso de los trabajadores públicos y empleados en general no se tradujo inmediatamente en una renovación de los cuadros directivos de las centrales, pero se insinúa alguna presencia creciente<sup>125</sup>.

La transformación de las identidades obreras no se reduce a la aparición de empleados estatales y de 'cuello blanco'; en el seno mismo de la clase obrera manufacturera se produjeron cambios que no era perceptibles en el corto plazo. Nos referimos a mayores grados de educación, creciente ancestro urbano, más rápida rotación con el consecuente rejuvenecimiento de la fuerza de trabajo y una no despreciable presencia femenina. Esto tuvo efectos incluso en el comportamiento sindical, produciéndose una renovación en las directivas y una mayor radicalización en la lucha<sup>126</sup>.

Otros actores sociales sufrieron a su modo la transformación de identidades colectivas. Los estudiantes de las jornadas de mayo de 1957 y los de febrero de 1971 se diferenciaban no sólo por los objetivos de lucha y los aliados: en el primer caso, lucharon contra la dictadura apoyados en el flamante Frente Civil, en el segundo, enfrentados a él, denunciaban sus resultados de todo orden. Las imágenes también habían cambiado: del prudente universitario vestido de "doctor" sin serlo, al barbudo desarreglado que imitaba al Ché; del demócrata, al revolucionario; del incluido en la política al exclu-

do. Las formas de lucha fueron cambiando a la par con la radicalización de las demandas: de las civilizadas marchas por predios estudiantiles a las bulliosas y descontroladas pedreas por la ciudad. Esto, sin hablar de la diferencia social que se produce en el estudiantado. Con la expansión del sistema universitario, "la universidad dejó de ser el tamiz de selección de la elite aristocrática del país"<sup>127</sup>. Estudiantes provenientes de estratos medios y bajos se hicieron presentes en los centros de enseñanza superior aunque no en las proporciones deseadas, haciendo más heterogénea su composición social.

Así podríamos enumerar las facetas diferentes de los diversos actores que acudieron a la protesta en el Frente Nacional. Las luchas cívicas, por definición policlasistas, alimentadas por la caída de la dictadura fueron creciendo y profundizando sus demandas, otorgándole de ese modo una dimensión diferente a la movilización ciudadana. El mundo campesino despertó en forma masiva en los setenta mostrando una imagen diferente del tradicional siervo sumiso. Fue un actor, atravesado por una gran heterogeneidad social interna, que ya no se podía ignorar. Algo similar ocurrió con los indígenas, especialmente del Cauca, quienes volvieron a producir las simpatías y temores que en su época produjo Manuel Quintín Lame. En el caso de las mujeres y de minorías étnicas como los afro-colombianos, habrá que esperar a períodos posteriores para que se produzcan perfiles más definidos en su identidad. Procesos transnacionales -como la proclamación por la ONU del decenio de la mujer en los setenta o la difusión de la lucha de los negros por los derechos civiles en USA- y avances legales serán también parte de esta lenta transformación.

Resta tocar el impacto de las 'clases medias' en el cambio de identidades. Hemos insistido no sólo en el punto de la heterogeneidad interna de cada movimiento sino en el papel dinámico de nuevos sectores sociales que irrumpen en esos años. En palabras simples nos referimos a las 'clases o capas medias' que ya definíamos antes. Pues bien, nosotros creemos que lo novedoso de la protesta social durante el Frente Nacional, en contraste con períodos previos,

fue la irrupción de esas clases medias las cuales, al no encontrar salidas a sus anhelos de diverso orden, se radicalizan introduciendo la dinámica ya descrita en páginas anteriores. Tal vez por ello hubo desafíos al régimen pero nunca una revolución.

¿Dónde están esos sectores medios? Ya los veíamos en las luchas cívicas y empresariales, también en las de estudiantes, considerados por antonomasia sus voceros, y en las pocas de mujeres. En relación con el mundo laboral, aparentemente más lejos de ellos, los encontramos en los empleados de 'cuello blanco' públicos y privados<sup>123</sup>. En el movimiento campesino también veíamos no sólo importantes contingentes medios en sus filas sino un crucial liderazgo de éstos en las formas organizativas. El panorama social del Frente Nacional muestra la irrupción de esos sectores medios en las diversas expresiones de la protesta. No queremos con este señalamiento decir que Colombia se volvió un país de clases medias -lejos de nosotros esta nueva forma de homogeneizar-, o que toda protesta fue de su exclusiva iniciativa. Lo que queremos decir es que ellos fueron el sector más dinámico y los grandes propiciadores de su radicalización, cuando ésta se presentó.

Si volvemos a mirar el cuadro de protestas por sectores reconocemos nuestro argumento. No otra cosa sugiere el peso mayoritario de las huelgas de los empleados estatales y de servicios considerados públicos, incluida la banca. O la dirección de las luchas cívicas por comerciantes o estudiantes. Esto para no redundar en el significado de las luchas estudiantiles o de los sectores considerados empresariales. Los obreros manufactureros, los campesinos pobres o los habitantes pobres indudablemente protestaron, pero no siempre en la forma radical como lo hicieron los sectores medios. Estos por su parte, mostraron gran capacidad de mimetizarse en los movimientos en los que participaron, asumiendo sus reivindicaciones como si fueran propias. Lo anterior implica tomar distancia de una explicación de las luchas sociales desde una lógica de costo-beneficio. Las manifestaciones de solidaridad estudiantil con huelgas obreras o luchas campesinas, por ejemplo, son difíciles de entender desde esa racionalidad, aunque ella no está del todo ausente, y nos proponen la necesidad de leer con mayor complejidad los fenómenos sociales<sup>129</sup>.

123. Rocío Londoño, "Las relaciones laborales y el movimiento sindical de los trabajadores del Estado" *Desarrollo y Sociedad* (Cuaderno 3 de Estudios Laborales), mayo de 1982, págs. 32 y 47. Los cálculos de la autora son para los años 1979-81.

124. Jaime Tenjo, "Impacto de la actividad sindical...", pág. 121.

125. Recordar lo dicho en la nota 78. Rocío Londoño dice lo siguiente sobre este aspecto: "...la ampliación del sindicalismo en el Estado se ha expresado en una nueva composición de las juntas directivas y de los núcleos de activistas..." ("Las relaciones laborales..." pág. 48)

126. Ana María Jaramillo y Jorge Bernal ilustran la llegada a Coltabaco de una generación nueva en los setentas, llamada de 'bachilleres', y el reemplazo no sólo laboral sino sindical que se produjo llevando a los trabajadores a posturas radicales desconocidas en el pasado (Sudor y tabaco. Medellín: Sintracoltabaco, 1988, págs. 170-181). En Fabricato el cambio fue menos dramático pero se percibió una disminución del control eclesial, mayor heterogeneidad en el estado civil (entraron más casadas y viudas) y la aparición de disidencias sindicales cada vez más radicales (Luz Gabriela Arango, Mujer, religión e industria. Medellín: Universidad de Antioquia, 1991, págs. 99-104 y 184-195). Las características de los empleados de Fenaltrase, encuestados por Rocío Londoño en 1981, mostraban los mismos rasgos pero más marcados aún: "La mayoría de los delegados eran empleados administrativos, profesionales y técnicos (70%); menores de 35 años (80%) y una cuarta parte mujeres" ("Las relaciones laborales..." pág. 48)

127. Fernán Torres, "Trayectoria histórica de la universidad" pág. 38.

128. Un sólo dato para reafirmar lo dicho nos lo ofrece Rocío Londoño en su encuesta a los delegados del Congreso de Fenaltrase: "los niveles de educación y calificación laboral de (ellos) son relativamente altos ya que el 32% tenía formación universitaria, el 44% secundaria o técnica y cerca de la mitad de ellos había tomado cursos de capacitación laboral en el Sena y otras instituciones" ("Las relaciones laborales..." pág. 48). Aquí no entramos en la discusión de si esto significa una 'proletarización' de las capas medias o un ascenso de sectores proletarios a ellas. El punto crucial es mostrar la heterogeneidad y la presencia de esas capas en su seno.

129. Podríamos citar muchos ejemplos de esta solidaridad a lo largo de estos años. Se nos viene a la mente un caso que no fue único aunque tal vez sí dramático: el apoyo que le dieron los estudiantes de la Universidad Nacional a la huelga de azafatas y despachadores de aviones de AVIANCA en 1963. Lo que era una simple adhesión a una marcha terminó en pedrea, paro estudiantil y cierre del alma mater. Claro que hubo motivaciones políticas por parte de sectores de la Juco y Juventudes del MRL, pero esas no bastan para explicar la complejidad de los eventos (El Tiempo, Nueva Prensa y Semana de agosto y septiembre de 1961). Este ejemplo, sin duda, no fue único en esos años. Para una reflexión teórica de las distintas racionalidades en la protesta véase María Revilla, "El concepto de movimiento social: Acción, identidad y sentido" en Romeo Grompone (Ed.), *Instituciones políticas y sociedad*. Lima: IEP, págs. 366-372

Sobre los sectores medios recayó el mayor peso de la frustración política y social del Frente Nacional. Eran los que más expectativas tenían ante los cambios estructurales de la economía y del sistema educativo, ante las promesas políticas del pacto bipartidista. Fueron ellos los más sensibles a la exclusión política y al descuido social de dicho régimen. Gente que se educan y califican y no encuentran empleo adecuado o la remuneración esperada, y que además no encuentran salida política a sus expectativas ni siquiera se pueden expresar autónomamente, deben recurrir a la protesta si no a formas más radicales de hacerse sentir. En eso hacían causa común con los sectores más bajos de la sociedad para quienes tampoco las promesas de redención económica o participación política se hicieron reales. Desde esa época las capas medias demostraron una gran capacidad para mimetizarse o adherir a intereses más amplios que los estrictamente derivados de su condición socio-económica, adaptándose a las condiciones y particularidades de cada sector en el que hicieron presencia<sup>100</sup>. La evolución de la oposición institucional y especialmente la de izquierda no es ajena a esta frustración de los sectores medios y no en vano, una parte no despreciable de su militancia provenía de ellos.



## CONCLUSIONES

A continuación arriesgaremos un intento de respuesta a la pregunta sobre el significado de la protesta social durante el Frente Nacional. Tres elementos resaltan de la lectura hecha que conviene colocar en forma explícita.

Ante todo es necesario afirmar que la protesta social en los años estudiados, como la sociedad civil en la que se inscribe, no fue homogénea. No sólo no hubo un campo popular unificado sino que

dentro de los mismos movimientos sociales la heterogeneidad campeó. Ni siquiera la clase obrera contó con la homogeneidad atribuida pues incorporó sectores tan disímiles como los asalariados rascos de baja calificación y los de 'cuello blanco'. Son estos últimos quienes adquirieron protagonismo en las luchas de esos años. Por tanto, no cabe una lectura guerrerista del conflicto social como si enfrentara dos ejércitos cohesionados. Ni siquiera el enemigo era común, la mayoría de las veces fue el Estado, pero en distintas instancias, otras veces fueron sectores de la misma sociedad civil.

Hubo también un cambio de protagonismo y, sobre todo, una pluralización de actores. Los obreros, quienes por tradiciones de lucha, adelantaron la mayoría de conflictos en los primeros años, se vieron desplazados por otros sectores en los cuales las clases medias se expresaban. Esto trajo cambios en los imaginarios y en la construcción de identidades cuyas consecuencias aún están por establecerse.

En segunda instancia, el análisis de las motivaciones de la protesta social no mostró tendencias claras en términos de causalidad. Las demandas materiales siguen siendo importantes pero no únicas. Al examinar el caso laboral vimos que variables sentidas como el salario, frente a las modificaciones del costo de vida y el empleo, explican parte del comportamiento sindical, pero no es claro si en forma reactiva o como anticipación a su variación. Hay, en todo caso, peso de variables políticas y culturales en la acción sindical, de lo contrario, cómo explicar fenómenos como los paros de solidaridad.

Cuando miramos la relación entre protesta y desarrollo llegamos a conclusiones igualmente complejas. Para las luchas cívicas y campesinas, el desarrollo desigual regional tiende a ser explicativo -es decir las zonas más atrasadas serían las más conflictivas-, pero al contemplar la dinámica más moderna del mundo sindical, la causalidad se invierte -es en las regiones más desarrolladas donde hay más choque laboral. Por tanto, el camino de análisis es ubicar en cada caso el peso de estas hipótesis, por demás ambas ciertas para las situaciones que pretenden explicar.

Pero la dinámica de la protesta no se circunscribe a una lógica instrumental de costo-beneficio. No toda lucha busca utilidad económica inmediata. Las muestras de solidaridad de sectores medios con causas ajenas son suficientes para ilustrar esta conclusión. El punto es que además de las demandas materiales, que siguen teniendo peso en nuestra sociedad, la gente busca impactos políticos e incluso cosas menos tangibles como reconocimiento o reforzar una identidad colectiva.

Un último problema es cómo martejó el Estado el conflicto social en esos 17 años. Ya decíamos que con torpeza si no con desprecio. A pesar de la retórica oficial, el bipartidismo abandonó muchos espacios de lucha social, en los campos y en las urbes, en las fábricas y universidades, en las alejadas comarcas y en las grandes ciudades. La resultante fue múltiple: un descuido de lo social, el vacío de intermediación política ante el Estado y la consiguiente radicalización de las capas medias en un clima de frustración generalizada. En aras de disminuir la confrontación

política de las dos colectividades tradicionales, cosa que sí logró el Frente Nacional, se aumentaron las fisuras sociales. Las promesas del régimen bipartidista estuvieron lejos de cumplirse y, si una forma de enemistad quedó relegada al pasado, otras hicieron irrupción. Ello no fue sino un signo más del divorcio creciente entre las protestas sociales y el Estado, con lo que ambas esferas, la social y la política, se debilitaron mutuamente. El mundo social, se quedó sin representación e intermediación ante el Estado, abandonado a su suerte. El de la política, se volvió, sin contacto con sus representados, un mundo autorreferido en donde la 'clase política' parecía bastarse a sí misma. Un Estado con creciente ilegitimidad, unos partidos políticos que no mediaban y unos movimientos sociales radicalizados pero precarios no constituyen propiamente la idea de suma positiva que esperaban lograr los diversos actores al inicio del Frente Nacional.



130 Tal vez no estemos tan lejos de la hipótesis de Claus Offe quien sugiere que en la Europa contemporánea los sectores medios son los actores principales de los movimientos sociales aunque no creemos que su presencia signifique, como él lo afirma, que las luchas populares dejen de centrarse en demandas materiales. Allí radica nuestra diferencia con el primer mundo (Véase "New Social Movements...", págs. 831-832).